

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

**“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, Y  
NO SÓLO UNA RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS  
JURÍDICAS DERIVADAS DEL DELITO COMO LO PRESCRIBEN  
LOS ARTÍCULOS N° 102 AL 105 DEL CÓDIGO PENAL”**

**Presentado Por:**

**Br. LUIS HERNANDO CARRION CORONADO**

**PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**Línea Institucional:**

**LEGISLACION Y CIENCIAS POLITICAS**

**Sub línea de Investigación:**

**DERECHO PENAL: NUEVAS TENDENCIAS**

**PIURA- PERU.**

**2018**

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

## FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, Y  
NO SÓLO UNA RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS  
JURÍDICAS DERIVADAS DEL DELITO COMO LO PRESCRIBEN  
LOS ARTÍCULOS N° 102 AL 105 DEL CÓDIGO PENAL”

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER TÍTULO  
DE ABOGADO.



.....  
Dr. SANTIAGO HERRERA NAVARRO  
ASESOR



.....  
Br. LUIS HERNANDO CARRIÓN CORONADO,  
TESISTA

PIURA - PERU

2018

## DECLARACION JURADA


### DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo, **LUIS HERNANDO CARRION CORONADO**, peruano, mayor de edad, identificado con DNI N° 44437434, con domicilio legal sito en Mz. A6 Lt. 12, A.H Nueva Esperanza – Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, con número de contacto 975640554, Email: lcarrion-69@hotmail.com; y dada condición de Bachiller y egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Escuela Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, **DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD**, lo siguiente:

Que, el Trabajo de Investigación que presunto a la Oficina Central de Investigación (OCIN) es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación ya desarrollado y/o realizado en el Perú o en el extranjero. En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal<sup>1</sup>, concordante con el art. 32° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección de los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente:



Piura, Diciembre del 2019

  
LUIS HERNANDO CARRION CORONADO  
DNI N° 44437434

<sup>1</sup> Artículo 411: El que, en un procedimiento administrativo, hace una declaración falsa en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena probativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 4° inc. 4.12 del Reglamento del Registro nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales – RENATI Resolución de Consejo Directivo n° 033-2016-SUNEDU/CD.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

## FACULTAD EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, Y  
NO SÓLO UNA RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS  
JURÍDICAS DERIVADAS DEL DELITO COMO LO PRESCRIBEN  
LOS ARTÍCULOS Nº 102 AL 105 DEL CÓDIGO PENAL”

TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO:



.....  
DR. LUIS ALBERTO YAIPEN HIDAGO  
PRESIDENTE



.....  
DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO  
MIEMBRO



.....  
DRA. ESTHEL Y ROSA BAYONA CASTRO  
MIEMBRO

PIURA- PERU.

2018





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

## FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

### DECANATO

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"



#### ACTA DE SUSTENTACIÓN POR TESIS

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos a las 11:00 a.m. horas del día Miércoles 21 Febrero del 2018 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para evaluar la Tesis titulada: «LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, Y NO SOLO UNA RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DEL DELITO COMO LO PRESCRIBEN LOS ARTICULOS N° 102 AL 105 DEL CÓDIGO PENAL», presentado por el Bachiller: CARRION CORONADO LUIS HERNANDO: oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, lo declaran:

APROBADO (X)

DESAPROBADO ( )

El dictamen y calificaciones podrán ser, según Reglamento de Tesis:

Excelente

Sobresaliente

Notable

Bueno

Con la mención de: **SOBRESALIENTE.**

- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título de Abogado.
- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título de Abogado, después de que el sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 21 de Febrero del 2018

DR. LUIS ALBERTO YAIPÉN HIDALGO  
Presidente

DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO  
Miembro

ABOG. ESTHELY ROSA BAYONA CASTRO  
Miembro

### **DEDICATORIA**

A Dios todo Poderoso, por permitirme lograr mis metas.

A mis Padres y hermanos por la confianza depositada en mí, y por su apoyo para poder alcanzar mis objetivos. A ellos mi eterna amor y gratitud

**LUIS HERNANDO**

## **AGRADECIMIENTO.**

Cuando llega el momento de agradecer y reconocer el apoyo que se recibe, son numerosos los nombre de las personas que hay mencionar, pero indicare algunas de ellas, sin los cuales no hubiera sido posible hacer realidad y culminar mi tesis y la obtención de mi título de Abogado.

En primer lugar a mi Dios, que es fuente de inspiración y hacedor de la vida, por haber dado sabiduría e inteligencia y fuerzas para hacer realidad la culminación de mi trabajo de Investigación y la obtención del título de Abogado.

Mis padres; hermanos quienes fueron los pilares para llegar a concluir mi carrera profesional, y siempre me alentaron para culminar mis estudios y mi trabajo de investigación la tesis.

A mi asesor de tesis el Dr. Santiago Herrera Navarro, y a los miembros de mi jurado, a todos los docentes de la Universidad Nacional de Piura - Facultad de Derecho, quienes han contribuido en mi formación académica y profesional.

## INDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	6
AGRADECIMIENTO.....	7
RESUMEN.....	11
ABSTRACT.....	12
INTRODUCCION.....	13
CAPITULO I.....	18
1. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	18
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	20
1.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	20
1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	21
1.2.3. PROBLEMAS SECUNDARIOS.....	22
1.2.4. INTERROGANTES TEÓRICAS.....	22
1.2.5. INTERROGANTES EMPÍRICAS.....	23
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	23
1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.....	23
1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.....	24
1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.....	25
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	25
1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.....	25
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	25
1.5. HIPOTESIS.....	25
1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.....	26
1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	26
1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES.....	26
CAPITULO II.....	28
2. MARCO TEORICO.....	28
2.1. RESPONSABILIDAD.....	28
2.1.1. DEFINICIÓN.....	28
2.1.2. RESPONSABILIDAD PENAL.....	28
2.2. PERSONAS JURÍDICAS.....	30
2.2.1. ANTECEDENTES.....	30
2.2.2. DEFINICIÓN.....	32
CAPITULO III.....	34



3. POLITICA CRIMINAL NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEGISLACION LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS.....	34
3.1. POLITICA CRIMINAL, ALCANCES DEFINICION. ....	34
3.2. LA POLÍTICA CRIMINAL EN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.....	36
3.3. EL ESTADO COMO RESPONSABLE DE DISEÑAR LA POLÍTICA CRIMINAL. ....	38
CAPITULO IV .....	42
4. TRATAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO.....	42
4.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DELAS PERSONAS JURÍDICAS. ....	42
4.2. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL.....	43
4.3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO COMPARADO.....	46
4.3.1. EN LATINOAMÉRICA. ....	46
4.3.2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ARGENTINA.....	47
4.3.3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN CHILE. 50	
4.3.4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN COSTA RICA. ....	52
4.3.5. EN NORTEAMÉRICA, EUROPA, OCEANÍA, ÁFRICA Y ASIA.....	53
4.3.6. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. ....	54
4.3.7. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN AUSTRALIA. ....	55
4.3.8. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN FRANCIA.....	56
4.3.9. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESPAÑA.....	57
4.3.10. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN SUDÁFRICA. ....	59
CAPITULO V .....	60
5. FUNDAMENTOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.....	60
5.1. FUNDAMENTOS EN CONTRA DE LA RESPONSABILIDAD.....	60
5.2. FUNDAMENTOS A FAVOR DE LA RESPONSABILIDAD. ....	62

5.3. LA PROPUESTA DE KLAUS TIEDEMANN: RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL. ....	66
A. EL CONCEPTO DE ACCIÓN JURÍDICO PENAL EN LA PROPUESTA DE TIEDEMANN .....	66
B. LA CULPABILIDAD POR DEFECTO DE ORGANIZACIÓN .....	68
C. PRESUPUESTOS PARA LA IMPUTACIÓN A LA PERSONA JURÍDICA .....	68
5.4. LA TESIS DE GÜNTHERHEINE: CULPABILIDAD POR ORGANIZACIÓN DEFICIENTE DE LA EMPRESA/ RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL INDEPENDIENTE. ....	71
CAPITULO VI .....	74
6. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA EN EL PERU .....	74
6.1. LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN PERÚ .....	74
6.2. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA. ....	75
6.3. EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO .....	79
6.4. ALCANCES CONTENIDOS EN EL ACUERDO PLENARIO 7-2009/CJ-116. ....	83
CONCLUSIONES .....	88
RECOMENDACIONES .....	91
BIBLIOGRAFIA .....	92
ANEXOS .....	98
ANEXO N° 01: PRESUPUESTO .....	98

## **RESUMEN**

El tema seleccionado, reviste vital importancia, no sólo porque ha puesto a la dogmática penal en una encrucijada de variar los esquemas clásicos de responsabilidad individual que se ha dictado y viene dictando aún en las cátedras de derecho de las diversas casas de estudio superior, sino porque además constituye un tema de actualidad que deben afrontar los Estados como un mecanismo para luchar contra la criminalidad organizada, que en la actualidad ha cobrado una mayor relevancia en el tráfico jurídico globalizado.

La criminalidad organizada, que atañe a las personas jurídicas, avanza a un ritmo geométrico, mientras la regulación para combatir con eficiencia su desarrollo sigue aún en las agendas del legislativo y a un ritmo aritmético. Para dar inicio a la solución de este problema, debemos primero conocer las instituciones jurídicas y doctrina imperante, con miras a enfrentar a la creciente delincuencia económica y empresarial con nuevas teorías, y sobre todo dentro de este último punto acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La doctrina imperante sostiene aún que las sanciones penales deben sólo aplicarse a las personas naturales, y no a las personas jurídicas. Sin embargo, reforzando las nuevas doctrinas de una responsabilidad jurídica compartida, se puede lograr reprimir penalmente a esta criminalidad, donde no solo se ven inmersas actuaciones individuales, sino también a nivel colectivo.

**PALABRAS CLAVES:** Responsabilidad, responsabilidad penal, persona natural, persona jurídica, consecuencias jurídicas, doctrina, legislación, estado peruano, criminalidad organizada, derecho penal.

## **ABSTRACT**

The theme selected, It is vitally important, no alone because he put to the dogmatic criminal in a crossroads of to vary the scheme classic of responsibility individual that has dictate and come dictating yet in the chairs of right of the diverse home of study higher, but because it also constitutes a theme of actuality that must face the states how un mechanics to fight against criminal organization, that in the actuality has charged a higher relevance in the traffic globalize legal.

The organization crime, that concern to the people juridical, advance to a geometric rhythm, while the regulation for fight with efficiency his development follow yet in the diary of the legislative and to a rhythm arithmetic. To give initiation to the solution of this problem, we must first know the legal institutions and impermanent doctrine, with a view to face to the growing economic crime and business and theories new, and above all in of this last point about responsibility criminal of the natural people, and not to legal persons. Though reinforcing the new doctrines of a shared legal responsibility can be achieved repress criminally this criminality, where not only they are immersed individual performances, but also at the collective level.

**Keywords:** Responsibility, criminal responsibility, natural people, legal person, legal consequences, legal doctrine, peruvian state, criminal organization, criminal law.

## INTRODUCCION

El tema seleccionado al problema de “La responsabilidad penal de la persona jurídica, y no solo una responsabilidad por la consecuencia jurídica derivada del delito como los prescriben los articulo N° 102 al 105 del Código Penal”, merece nuestra atención, no sólo porque ha puesto a la dogmática penal en una encrucijada de variar los esquemas clásicos de responsabilidad individual, sino porque además constituye a nuestro entender un tema de actualidad que deben afrontar los Estados como un mecanismo para luchar contra la criminalidad organizada.

La criminalidad organizada avanza a pasos agigantados, mientras la regulación para combatir con eficiencia su desarrollo sigue aún en las agendas del legislativo, durmiendo el sueño de los justos. Para dar inicio a la solución de este problema, es necesaria la adaptación del Derecho Penal para enfrentar a la creciente delincuencia económica y empresarial, y sobre todo dentro de este último punto acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La doctrina imperante sostiene aún que las sanciones penales deben sólo aplicarse a las personas naturales, y no a las personas jurídicas, al haber siempre la doctrina especializada elaborado una dogmática pensada sólo para la persona humana.

A pesar de lo detallado, el dogma del “*Societas Delinquere Non Potest*” (las personas jurídicas no responden penalmente) no tiene en la actualidad una vigencia absoluta. El Derecho Penal que tradicionalmente ha sido creado para las personas físicas, hoy por hoy, los países Europeos como España, Francia, Alemania han incorporado en sus legislaciones leyes que se orientan a castigar con sanciones punitivas a las personas jurídicas, y es que la relevancia actual de la criminalidad producida en el contexto empresarial provoca exigencias político criminales que han motivado que el antes

excepcional discurso de responsabilidad penal de la propia persona jurídica se transforme en una tendencia dominante que trasciende los límites del *Common Law*.

En el Primer Capítulo abarcaremos los aspectos metodológicos, planteamiento del problema, formulación del problema, interrogantes teóricas, interrogantes impropias, justificación del problema,, justificación metodológico, justificación práctica, objetivos de la investigación, hipótesis, identificación de variables, marco teórico, marco jurídico, y metodología.

En Segundo capítulo intentamos justificar la necesidad de que en nuestra legislación se incorpore la normatividad que establezca la responsabilidad penal de la persona jurídica, en tanto la discusión dogmática no puede seguir siendo un obstáculo para que se avance en la represión contra la Criminalidad organizada, por eso resulta necesario que dentro de una justificada política criminal, responsabilidad del Estado, se regule a la brevedad sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica

En el Capítulo Tercero hacemos un recuento de los antecedentes históricos sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y nos damos cuenta que este no es un tema nuevo sino que viene discutiéndose desde larga data, por un lado la defensa de la teoría de la ficción por SAVGNY y que se trasluce en la defensa del ya tradicional legado romano *Societas Delinquere Non Potest*”, las personas jurídicas no pueden ser censurables, según el cual por los delitos cometidos en el seno de la persona jurídica, responde aquel sujeto que en su representación actúa, y por otro lado la teoría de la realidad, concebida por GIERKE, plantea que la persona jurídica debe ser concebida como un ser colectivo real, reconoce a las personas jurídicas voluntad propia y, por ende, los entes colectivos no son una mera proyección de las personas naturales que los conforman sino una específica y autónoma realidad, independiente. También desarrollamos el tratamiento dado a este problema por el Derecho Internacional la responsabilidad penal de las personas jurídicas



ha partido desde la demanda político criminal de la criminalidad de empresa, siendo más bien que el tratamiento de la criminalidad organizada a nivel internacional ha sido la principal fuente de influencia para la admisión de esta responsabilidad. Tan es así, que en las propuestas internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se presenta como un instrumento clave, conjuntamente con el comiso, para estrangular los fondos financieros de las organizaciones criminales, en la medida en que interrumpen el ciclo económico de las ganancias ilícitas. Se consideran incluso como herramientas operativas para aplicar de manera cautelar sanciones de tipo patrimonial como el comiso de las ganancias o la disolución de las asociaciones ilícitas y de las personas jurídicas que le han servido de cobertura, en tanto medidas de política criminal que se consideran esenciales para combatir la acumulación de las ganancias ilícitamente obtenidas. Asimismo, se señala el aporte al avance que se viene dando a la solución de esta problemática en la regulación del derecho comparado tanto en Latinoamérica, como en Europa y los Estados Unidos. Por eso hoy en día el análisis en perspectiva histórico del problema planteado acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas nos muestra un camino cada vez más ascendente de consensos sobre su admisión, es cierto que nos encontramos en la discusión de los diversos modelos, instituciones jurídicas, ideológicas que lo sustentan, pero lo cierto es que tanto en los instrumentos internacionales, como en el derecho comparado la tendencia de responsabilizar a las personas jurídicas por los ilícitos penales que produzca la actuación organizada de sus actuaciones ha logrado consensos importantes en las legislaciones.

El Cuarto Capítulo, se analizan los fundamentos a favor y en contra para justificar la responsabilidad y la no responsabilidad de la persona jurídica, defendiendo esta última posición el hecho de que el desarrollo dogmático penal no está diseñado para establecer

responsabilidad penal a las personas jurídicas sino únicamente a las personas individuales como seres humanos, en tanto que como fundamentos a favor se unen en nuestro desarrollo las teorías sustentadas por TIEDEMANN Y HEINE, que defienden la viabilidad de establecer responsabilidad penal a los entes colectivos dentro de la culpabilidad en la organización por defecto o deficiente organización.

El Capítulo Quinto, lo dedicamos al estudio de la normatividad actual en el derecho peruano y que se encuentran regulados en el artículo N° 27 como el primer antecedente para vincular a los entes colectivos a través de sus representantes a lo que la doctrina ha denominado “el actuar en lugar de otro” y la regulación de las consecuencias accesorias previstas en el artículo N° 105 del Código Penal y aunque se discute sobre su naturaleza jurídica doctrinariamente rechazándose por algunos que sean penas en estricto, por no estar previstas como tal en el artículo N° 28 de la norma sustantiva penal, otros en cambio si la consideran como sanciones penales o medidas de seguridad; para finalmente el Acuerdo Plenario 7-2009/CJ-116, inclinarse por darle categoría de sanción penal

Finalmente podemos decir que el derecho penal en respuesta al desarrollo empresarial, no puede ser ajeno a reconocer que la empresa como agente económico y social, que ocupa un lugar fundamental en la sociedad postindustrial tiene derechos, pero también deberes, entre los cuales se incluye la responsabilidad penal (y la protección jurídica vinculada a ésta). Como apunta VOGEL: “el precio que debe pagarse por el liderazgo es, claro está, la responsabilidad. Un pragmatismo cada vez más extendido puede referirse a que las sanciones penales deben ser aplicada como mecanismo eficaz para conseguir que las normas sean también respetadas en la economía y también frente a los agentes económicos, los empresarios y las empresas”.

Ante esta ascendente aceptación de incorporar en las legislaciones acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha superado la etapa del sí de la

responsabilidad penal, por lo que corresponde ahora el cómo hacerlo, esta situación provoca la necesidad de revisar la conveniencia político criminal de responsabilizar directamente a los entes empresariales a la luz de los modelos puestos en debate para determinar si la criminalidad de empresa debe enfrentarse a través de fórmulas destinadas al castigo del sujeto individualmente responsable del hecho punible. Lo que rescatamos de las opiniones revisadas es que lo que se muestra como plenamente admisible, es cuando un delito sea producto de la actividad organizada de una persona jurídica, alguna consecuencia jurídica debe contemplarse en el ordenamiento penal, si no queremos caer en la impunidad o en un desmedro de los fines de prevención general de algunos tipos penales que sean vulnerados principalmente por organizaciones. Existe pues la necesidad de encausar jurídicamente la ética del mercado, surgida de la demanda social de responsabilidad de la empresa, dentro de la cual, la responsabilidad penal no puede serle ajena.

## CAPITULO I

### 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

#### 1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

El presente trabajo de investigación está referido a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Teniendo en consideración que ya la legislación comparada ha incorporado la responsabilidad penal de los entes colectivos y en el caso específico del Perú se han suscrito instrumentos internacionales<sup>1</sup> en los cuales se recomienda se incorpore en el derecho interno normas que establezcan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Si bien el legislador penal ha mantenido la posición tradicional del legado romano *Societas Delinquere Non Potest*”, las personas jurídicas no pueden ser censurables, según el cual por los delitos cometidos en el seno de la persona jurídica, responde aquel sujeto que en su representación actúa- se admite en el artículo N° 27 del Código Penal la responsabilidad penal por el actuar en lugar de otro<sup>2</sup>; y por otro lado la teoría de la realidad, concebida por GIERKE, plantea que la persona jurídica debe ser concebida como un ser colectivo real, reconoce a las

---

1.- Así podemos citar el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre Los Derechos del niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, suscrito por el Perú el 1 de noviembre de 2000. Aprobado por Resolución Legislativa No 27518, publicada el 17 de setiembre de 2001, y ratificado por Decreto Supremo No 078-2001-RE, publicado el 6 de octubre de 2001, el cual anexa el texto íntegro del Protocolo. Vigente desde el 12 de febrero de 2002. Así en su Artículo 3<sup>a</sup>.4) establece: 2Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.

2.- El artículo 27 del Código Penal Peruano establece: “Responsabilidad de Persona Jurídica. “El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito, es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurren en él, pero sí en la representada.

personas jurídicas voluntad propia y, por ende, los entes colectivos no son una mera proyección de las personas naturales que los conforman sino una específica y autónoma realidad, independiente.

Demos tener en cuenta también el tratamiento dado a este problema por el Derecho Internacional la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha partido desde la demanda político criminal de la criminalidad de empresa, siendo más bien que el tratamiento de la criminalidad organizada a nivel internacional ha sido la principal fuente de influencia para la admisión de esta responsabilidad. Tan es así, que en las propuestas internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se presenta como un instrumento clave, conjuntamente con el comiso, para estrangular los fondos financieros de las organizaciones criminales, en la medida en que interrumpen el ciclo económico de las ganancias ilícitas.

Como hemos referido la posición adoptada en nuestro código es la no responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, la nueva tendencia apunta a que por política criminal debe ampliarse el ámbito punitivo a los entes colectivos, conforme se viene incorporando a los textos punitivos dentro del derecho comparado.

En tal sentido el Estado, debe intervenir dentro de la facultad establecida para diseñar una política criminal en aquellos casos a que a luz de la realidad social deben establecerse mecanismos legales para su control, como acertadamente apunta nuestro maestro PERCY GARCÍA CAVERO: En la actual organización de la sociedad, resulta un dato incuestionable la intervención preponderante de las

personas jurídicas en el tráfico jurídico-patrimonial. La empresa ha desplazado claramente a la figura del comerciante individual en el terreno de la economía, lo que ha llevado no sólo a que la normativa jurídico, privada tenga en cuenta desde hace tiempo este fenómeno, sino que el propio Derecho penal se plantee en la actualidad la necesidad de considerar a la persona jurídica en sus criterios de imputación de responsabilidad.

## **1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

### **1.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.**

Hoy en día no es un imposible que se incorpore a nuestra legislación la previsión de establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, en efecto, razones de política criminal hacen viable que el legislador nacional establezca en el texto punitivo la punibilidad de la conducta de la persona jurídica, atendiendo además el avance de la criminalidad organizada.

Durante mucho tiempo la Criminología se concentró en analizar al “delincuente” para explicar la etiología del delito. Para ello buscó la explicación en ciertas características individuales propias de personas de las llamadas clases sociales bajas, que era la que tradicionalmente cometía los llamados delitos violentos. Con el cambio de interés ya no hacia la persona sino hacia el acto, la atención se volcó hacia aquellos delitos que más “daño social” causaban. Es así que las investigaciones criminológicas de las últimas décadas del siglo XX, impulsadas decisivamente por el norteamericano *DONAL SUTHERLAND*, han dedicado especial interés a los “delitos económicos”. Con ello hace su aparición el *Derecho penal económico*, sub disciplina del Derecho Penal, dentro del cual se analiza un



grupo de delitos estrechamente vinculado con el funcionamiento del sistema económico. Debido a la inevitable interrelación entre el Derecho penal y el extrapenal (los distintos Derechos relacionados con temas económicos), resultó inevitable también que se comenzara a analizar a la “empresa”, o sea al “ente colectivo”. Por ello, la criminología que analiza el delito económico no puede prescindir de las empresas (personas jurídicas), las cuales tienen una actuación decisiva en la vida económica, más importante aún que la de las personas individuales. Y es así que en el campo del Derecho penal económico se ha comprobado una y otra vez que la persona jurídica participa, ya no como excepción, sino como regla general en la comisión de delitos.

### **1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.**

#### **¿ES POSIBLE ESTABLECER RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURIDICAS?**

El propósito de la presente investigación tiene como finalidad establecer los fundamentos por los cuales es viable se incorpore de manera directa la responsabilidad penal de la persona jurídica, y no sólo una responsabilidad por las consecuencias jurídicas derivadas del delito como lo prescriben los artículos N° 102 al 105 del Código Penal.

Desde este punto de vista general, la tesis de bachiller en abogacía, que nos proponemos desarrollar pretende responder a la siguiente pregunta.

¿Cómo está regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación comparada y si es posible incorporarla en la legislación peruana y en

qué medida resulta importante para combatir la criminalidad organizada en el Perú?

### **1.2.3. PROBLEMAS SECUNDARIOS.**

Frente a este problema planteado, dilucidaremos si es que el actual tratamiento establecido en nuestra legislación penal resulta suficiente para que los jueces puedan aplicar sanciones derivadas de las consecuencias jurídicas penales contra las personas jurídicas.

Frente al problema, que solución es posible plantear desde el punto de vista de la política criminal y como el legislador nacional puede incorporar normas que penalicen a las personas jurídicas sin que las mismas sean contrarias al ordenamiento constitucional, por lo que también debemos elaborar otras interrogantes que se generan a raíz del problema principal, teniendo que formular las siguientes preguntas.

### **1.2.4. INTERROGANTES TEÓRICAS.**

- a).- ¿Cómo se encuentra regulado la responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú?
- b).- ¿Cuáles son los antecedentes normativos sobre responsabilidad de las personas jurídicas que regula nuestro Código Penal?
- c).- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que han servido de base para la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

d).- ¿Cuál es el sustento para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

e).- ¿Cuál es la tendencia actual en la legislación comparada respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

f).- ¿Cuál es el tratamiento que ha planteado nuestra Corte Suprema para determinar la responsabilidad de las personas jurídicas?

#### **1.2.5. INTERROGANTES EMPÍRICAS.**

a).- ¿Cuáles son los principales problemas aplicativos que presentan la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú?

b).- ¿Cuáles son los criterios de interpretación que utilizan quienes están en contra de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

c).- ¿Cuáles son los criterios de interpretación que utilizan los jueces para determinar la responsabilidad de las personas jurídicas?

d).- ¿Cuál es el índice de procesos relevantes que se han resuelto en la Corte Suprema sobre responsabilidad de personas jurídicas como consecuencia del actuar en lugar de otro?

### **1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.**

#### **1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.**

El tema que nos ocupa presenta como justificación teórica, el explicar la base que permita generar criterios que determine coadyuvar a la mejor regulación de la

responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico y coadyuvar a adoptar un criterio uniforme que permita a nuestros legisladores incorporar en el texto punitivo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Al respecto, pretendemos orientar la investigación a fin de que responda e interrelacione los siguientes componentes:

- **Ontológico:** Porque atenderemos los convenidos bio-psicosociales que inciden en los supuestos de regulación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- **Teorético:** Porque utilizaremos la doctrina, conceptos, jurisprudencia y taxonomías existentes de la materia que nos ocupa.
- **Axiológico:** Porque nuestro modelo teórico, pretende ser respetuosos de los criterios actuales que buscan incorporar en los textos punitivos la responsabilidad penal de los entes colectivos.
- **Teleológico:** Porque esta investigación pretende presentar conclusiones que puedan operar tanto en la política criminal en la lucha contra la criminalidad de empresa y organizada.

### **1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.**

El tema responde por un lado, a un modelo fundado en la epistemología, así como a tipos de investigación (por ejemplo: investigación de síntesis, para revisar el material existente y evaluar que se ha tratado sobre nuestro tema; investigación operativa para mejorar la traducción de las hipótesis en operaciones de investigación; e investigación epistemológica; que permite hacer un análisis del

lenguaje penal, y por otro lado, al impacto social; es decir, no buscar solo una investigación dogmática, sino, también una investigación jurídica-social.

### **1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.**

Al trabajar con el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas, operable en el ordenamiento jurídico penal, conllevará a que el órgano jurisdiccional, los ciudadanos y abogados, cuenten con los elementos necesarios, a fin de que los primeros expidan decisiones racionales que afronten, desde las perspectivas de política criminal con un derecho penal eficaz en la lucha contra la criminalidad, evitando la impunidad de los entes colectivos.

## **1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.**

### **1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.**

Determinar si la incorporación al texto punitivo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas hará efectiva la labor del Estado en la lucha contra la criminalidad organizada y posibilitar una herramienta eficaz a los fiscales y jueces en la determinación de las responsabilidades derivadas de las consecuencias jurídicos penales en las que intervengan las personas jurídicas.

### **1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.**

Establecer en la regulación penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

## **1.5. HIPOTESIS.**

“RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, A LA LUZ DE LA LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL”.

## **1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.**

### **1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.**

#### **1.6.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE A:**

La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Doctrina nacional e internacional, legislación nacional e internacional.

#### **1.6.1.2. VARIABLE INDEPENDIENTE B:**

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: necesidad de incorporar en la legislación nacional la responsabilidad penal.

#### **1.6.1.3. VARIABLE INDEPENDIENTE C:**

Legislación comparada e internacional con relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

#### **1.6.1.4. VARIABLE INDEPENDIENTE D:**

Constitucional Política del Perú, Código Penal y legislación internacional.

### **1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES.**

#### **1.6.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE A:**

Alternativas socio- jurídicas de solución

#### **1.6.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE B:**



La responsabilidad penal de las personas jurídicas como mecanismo de lucha  
contra la criminalidad organizada.

## **CAPITULO II**

### **2. MARCO TEORICO**

#### **2.1. RESPONSABILIDAD.**

##### **2.1.1. DEFINICIÓN.**

En términos generales, la responsabilidad es la capacidad de toda persona de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la relación de causalidad que une al autor con el acto que realice<sup>3</sup>.

La responsabilidad se exige solo a partir de la libertad y de la conciencia de una obligación. Para que exista la responsabilidad, el autor del acto u omisión que haya generado una consecuencia que afecte a terceros, debe haber actuado libremente y en plena conciencia<sup>4</sup>.

##### **2.1.2. RESPONSABILIDAD PENAL.**

La responsabilidad penal tiene como finalidad sancionar, la cantidad de la cuantía a pagar se calcula en diferentes medidas, la multa que está basada principalmente en la gravedad del hecho delictivo, la responsabilidad penal se suele pagar al estado.<sup>5</sup>

La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un delito o haber sido cómplice de éste<sup>6</sup>.

---

3.- Sobre responsabilidad, Recuperado 14 de abril de 2014 en: <<http://www.gerencie.com/sobre-la-responsabilidad.html>>

4.- Sobre responsabilidad, ob cit.

5.- José Emmanuel Linares Linares, 2011, responsabilidad penal.

6.- Sobre responsabilidad, ob cit.

La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir. Este tipo de responsabilidad se presenta cuando el funcionario ha realizado una conducta que se tiene tipificada como delito en el Código Penal; entre ellas podemos mencionar: el peculado, el cohecho, el prevaricato; o cuando exista por parte del servidor público un interés ilícito en la celebración de contratos, para provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones; o Cuando trámite cualquier actuación contractual sin el cumplimiento de los requisitos legales o esenciales como la celebración o la liquidación del contrato, para obtener un provecho ilícito para sí mismo, para el contratista o para un tercero<sup>7</sup>.

Es la consecuencia jurídica cuando existe una violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las personas<sup>8</sup>.

La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a delinquir<sup>9</sup>. Es aquella que se desprende de la ejecución de actos penalmente sancionables, y que tienen dos manifestaciones: la que recae en el actor del delito y que puede afectar su vida, donde la pena de muerte subsiste, su libertad, su capacidad civil o su patrimonio, y la que civilmente recae sobre el propio autor de

---

7.- José Emmanuel Linares, obcit

8.- José Emmanuel Linares, obcit

9.- Sobre responsabilidad, ob cit.

la infracción, por vía de reparación de agravio material o moral que haya causado<sup>10</sup>.

Penalmente la responsabilidad de los autores se extiende a los instigadores, a los cómplices y a los encubridores, y solo desaparece por la existencia de alguna causa de inimputabilidad o alguna circunstancia eximente, o disminuida en lo que refiere a la índole o cuantía de la pena si en el hecho concurren a las circunstancias de atenuación previstas por ley<sup>11</sup>.

#### **2.1.2.1.- TIPOS DE RESPONSABILIDAD PENAL.**

**A.- COMÚN:** Cuando el delito cometido puede ser realizado por cualquier individuo, como por ejemplo: el robo, el abuso sexual o el homicidio<sup>12</sup>.

**B.- ESPECIAL:** Cuando el delito es cometido por un funcionario público aprovechándose de su condición, por ejemplo: el peculado, la prevaricación o la concusión<sup>13</sup>.

### **2.2. PERSONAS JURÍDICAS.**

#### **2.2.1. ANTECEDENTES.**

Desde finales del siglo XVIII las personas jurídicas comenzaron a tener una participación más intensa en el tráfico jurídico-patrimonial. Este fenómeno llevó a la discusión sobre la esencia de la persona jurídica, que dio lugar fundamentalmente a dos posturas encontradas en la dogmática jurídica. Por un lado, hay que destacar el planteamiento de SAVIGNI quien, a partir de un concepto de derecho subjetivo vinculado a la idea de sujeto individual, negó la realidad

---

10.- Manuel Ossorio, diccionario de ciencias, jurídicas, políticas y sociales 2003 editorial Eliasta

11 .- Manuel Ossorio, ObCit

12 .- José Emmanuel Linares, ObCit

13.- José Emmanuel Linares, Ob Cit

jurídica de las personas jurídicas a las que calificó no más que una ficción<sup>14</sup>. Esta ficción, por otra parte, solamente podría utilizarse en el Derecho Civil, pero no en el Derecho penal, pues en este ámbito las personas son tratadas como seres pensantes y con voluntad.

Si bien se ha dicho que no fue el debate brevemente esbozado sobre la esencia de la persona jurídica, sino las teorías de la pena del siglo XVIII lo que influyó en la discusión dogmática sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, lo cierto es que este debate ha informado de algún modo el espíritu de ese tiempo. En efecto, para poder decidir si la pena despliega su función, hay que precisar cómo están constituidos los sujetos del derecho penal. Por ello, no sería inexacto sostener que defensores de la irresponsabilidad penal de la persona jurídica como BERNER, BINDING o VON LILIENTHAL se apoyaran de alguna forma en la teoría de la ficción<sup>15</sup>, mientras que autores como VON LISZT, HAFTER y MESTRE afirmaron la posibilidad de una responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de su realidad social<sup>16</sup>. En cualquier caso, la posición doctrinal que finalmente se impuso en esta etapa de la historia de las ideas dogmáticas fue aquella que negaba la responsabilidad penal de los entes colectivos, sintetizándose su conclusión central en el extendido aforismo de *Societas delinquere non potest*. La legislación penal por su parte, se mantuvo fiel a esta formulación de principio, de manera que ante la comisión de hechos delictivos en el marco de las actividades de personas

---

14.- Savigni, System des heutigen römischen Rechts, Berlin, 1840, T. II,

15.- Vide Berner, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, p. 195; Binding, Handbuch des Strafrechts, Leipzig, 1885, Von Lilienthal, Grundriss zu Vorlesungen über deutsches Strafrecht, 2º ed. 1890

16.- Vide Von Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 3º ed, Berlin, 1888, pp. 114 y ss; Hafter, Die Delikts- und Str. affahigkeit der Personenverbände, Berlin, 1903, pp. 75 y ss; Mestre, Les Personnes Morales et le Probleme de leur Responsabilité Pénale, Paris, 1899.

jurídicas, se consideraba suficiente sancionar a las personas naturales que habían participado comitiva u omisivamente en el hecho delictivo.

### **2.2.2. DEFINICIÓN.**

Sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como individuo sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel<sup>17</sup>.

Son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas las clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales<sup>18</sup>.

En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física.<sup>19</sup>

VÉLEZ SARSFIELD<sup>20</sup>, expresa que se los denomina personas jurídicas por que no existen sino como un fin jurídico, cosa rebatible sin dificultad, puesto que no es algo jurídico lo que las crea por lo general, sobre todo las privadas, sino una finalidad, económica política cultural deportiva o de otro género, que tiene que adoptar para su funcionamiento ese ropaje jurídico, cosa muy distinta.

Para el jurista nacional profesor principal de la Universidad Católica del Perú JUAN ESPINOZA ESPINOZA<sup>21</sup> supone que es la organización de personas

---

17.- Sandra Espinoza Gutiérrez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.2011 Lima.

18.- Sandra Espinoza Gutiérrez, Ob cit.

19.- Sandra Espinoza Gutiérrez, ObCit

20.- Vélez Sarsfield citado por Manuel Ossorio en su diccionario de ciencias, jurídicas, políticas y sociales 2003 editorial Eliasta

21.- Espinoza Espinoza, Juan, Derecho de las Personas: Personas Jurídicas y Organizaciones de Personas no Inscritas, Tomo II, Editorial Grijley, sexta edición mayo 2012.

jurídicas que se agrupan en la búsqueda de un fin valioso lucrativo o no lucrativo y que cumplen con la formalidad establecida por el ordenamiento jurídico para su creación que puede ser mediante la inscripción en Registros públicos o través de una ley. Este centro de imputación también puede ser atribuible a una sola persona sea esta natural o jurídica.

### **CAPITULO III**

## **3. POLITICA CRIMINAL NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEGISLACION LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS.**

### **3.1. POLITICA CRIMINAL, ALCANCES DEFINICION.**

La expresión política criminal, viene utilizándose desde principios del siglo XIX, atendiendo a las particularidades que debería tener la doctrina, la legislación y la jurisprudencia especializadas, para preservar a la sociedad de los actos que más gravemente la pudieran perjudicar, definidos como delitos, implica el planteamiento de la cuestión delictiva desde la política, por tanto significa la relación con el poder, con la capacidad de decidir dentro de la estructura social, por tanto, de plantear, definir, dirigir, ejecutar y organizar un modelo societal determinado.

Para JUAN BUSTOS RAMÍREZ, la Política Criminal es aquel aspecto del control penal que tiene relación con el poder del Estado para caracterizar un conflicto social como criminal<sup>22</sup>.

El carácter social del Estado no sólo lo legitima para intervenir, sino que lo obliga a intervenir en los procesos sociales en general y en la solución de los conflictos en particular. Frente a un conflicto social, el Estado social y democrático de derecho debe antes que nada desarrollar una política social que conduzca a su prevención o solución o, en último término, pero sólo en último término, optar por definirlo como criminal. Cuando así lo hace está ejercitando diferentes alternativas que puedan presentarse para la solución del conflicto una opción política que en forma específica tomará el nombre de Política Criminal en tanto que está referida a la criminalización

---

22.- Bustos Ramírez, Juan Obras Completas Tomo I Derecho Penal Parte General. Ara Editores- Colección Iustitia- Perú 2004. Pág. 505



Por su parte JOSE HURTADO POZO<sup>23</sup>, citando a ÁNGEL y VICTOR PRADO SALDARRIAGA, nos dice que a esta reacción organizada de la colectividad frente a las acciones delictuosas (lato sensu) que amenazan su cohesión y su desarrollo armónico, se le denomina política criminal y todo sistema social, en este sentido, la tiene. Cuando más evolucionada es la sociedad, la política criminal deviene una estrategia frente a la delincuencia, elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportados por la observación objetiva. Es tarea de esta disciplina describir tanto la reacción social contra la delincuencia, como determinar los lineamientos que deben seguirse para lograr una mayor eficacia.

Las reformas penales han sido fuertemente influenciadas por los estudios y los debates tendientes a establecer las estrategias a adoptar para luchar más eficazmente contra la criminalidad. Por ejemplo, la reforma del Código Penal alemán fue marcada por el Proyecto alternativo, elaborado de manera esencial sobre la base de criterios de política criminal, en detrimento de preocupaciones de orden dogmático. En el Perú, por el contrario, la reforma de 1991 no contó con la información necesaria sobre la realidad delictuosa y sobre la manera de reaccionar contra la delincuencia. Imperaron sobre todo preocupaciones de orden dogmático y no de política criminal. Si bien el sistema de sanciones penales fue modificado de manera importante, las razones no fueron el fruto de un análisis sobre la manera de cómo deberían ser reguladas para que sean eficaces en un medio como el peruano. La actual propuesta de reforma materializada en el Anteproyecto de 2004, no tiene ninguna pretensión innovadora substancial por falta de una concepción seria de cambio del sistema de control penal<sup>24</sup>.

---

23 Hurtado Pozo, José "Manual de Derecho Penal Parte General I" 3ra Edición 2005- Editora Jurídica Grijley EIRL. Pág. 59

24.- Hurtado Pozo, ObCit Pág. 61-62

Una coherente y racional política criminal supone, por tanto, un esfuerzo de sistematización y de actualización de las instituciones que luchan contra la delincuencia, instituciones que deben, estar integradas en un conjunto coordinado dentro del cual se complementan, en lugar de oponerse, y que deben ser adecuadas a las condiciones sociales.

En realidad, la Política Criminal se refiere a la competencia y actividad de los poderes públicos, dirigida a la realización de los objetivos constitucionales en favor de los bienes jurídicamente tutelados, mediante instrumentos punitivos y no punitivos. La definición no incluye la actividad de los grupos de la sociedad civil, que inciden en el Sistema Penal, entre otros, la actividad de los grupos feministas, ecologistas, grupos de presión económicos etc., así como el análisis y valoración de los teóricos y académicos.

Sin embargo, la humanidad enfrenta una agravación cualitativa y cuantitativa del fenómeno criminal, por lo que en muchos estados se manifiesta una clara tendencia a reinstaurar una política criminal represiva<sup>25</sup>, mediante la severidad de las sanciones penales, así como en el ámbito procesal penal, en las instancias policial, judicial y penitenciaria.

### **3.2. LA POLÍTICA CRIMINAL EN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.**

Hay que convenir, sin embargo; que puede haber diferentes políticas criminales y lo que nos interesa a nosotros analizar es aquella propia de un Estado de Derecho social y democrático<sup>26</sup>. Luego, como ha de ser ejercido el poder de definición de

---

25.- Feuerbach, En su obra Manual de Derecho Penal; define la política Criminal como el conjunto de métodos represivos con los que el Estado reacciona contra el crimen

26.- Así se expresa el artículo 43 de nuestra Carta Política "La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana" y el artículo 44 agrega: "Son deberes primordiales del Estado: (...) garantizar la plena vigencia de los

los procesos criminales en un Estado que tiene como fundamento y objetivo la consecución plena de la libertad y la igualdad

La decisión político criminal de definir un proceso como criminal se plasma en las normas penales. La política Criminal queda reflejada en ellas. En una decisión de esta naturaleza el Estado social y democrático de derecho ha de tener en cuenta la criminología. Esta disciplina que tiene por objeto el análisis sociológico de los procesos de criminalización, esto es, expone cómo se construyó y definió lo criminal y cuáles son los efectos que en la realidad social produce la criminalización de una conducta.

El derecho penal como disciplina no puede tener sólo como objeto la norma, pues ésta no tiene validez en sí misma. Su validez proviene de la Política Criminal. Las normas penales deben estar expuestas a la permanente revisión crítica desde la realidad social. Debe haber, en consecuencia, una permanente interacción entre la criminología, la Política Criminal y el Derecho Penal.

La libertad e igualdad son fundamento y objetivo del Estado social y democrático de derecho. En el ámbito de lo penal hay manifestación de desigualdad toda vez que se constata que hay una desigual distribución de lo criminal. Los sectores de la población menos favorecidos económica y socialmente se ven discriminados en tanto que tienen que soportar una mayor carga de lo criminal toda vez que se constata que los procesos de definición se singularizan en normas penales cuyos destinatarios son precisamente esos sectores. Por el contrario, los sectores más favorecidos económica y socialmente tienen una menor carga, lo que se constata con la escasa presencia en los Códigos Penales de conductas que sólo es posible

---

derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia (...)"

realizar desde posiciones de poder económico y político y también, respecto de las que ya están, por su casi nula aplicación por parte de los tribunales.

Un control penal democrático ha de tomar en cuenta estas desigualdades y hacer una distribución más igualitaria de lo criminal. Ello significa no sólo la descriminalización de ciertas conductas de escasa significación y someterlas a otros tipos de control diferentes al penal, sino también la incorporación al Código Penal de otros comportamientos propios de grupos privilegiados y que por su gran significación social podrían ser criminalizados, como aquellos que se cometen por las personas jurídicas (como los delitos contra el medio ambiente o de la calidad del consumo).

### **3.3. EL ESTADO COMO RESPONSABLE DE DISEÑAR LA POLÍTICA CRIMINAL.**

En tal sentido el Estado, debe intervenir dentro de la facultad establecida para diseñar una política criminal en aquellos casos a que a luz de la realidad social deben establecerse mecanismos legales para su control, como acertadamente apunta nuestro maestro y profesor de la Universidad de Piura y catedrático del doctorado de la Universidad Nacional de Piura PERCY GARCÍA CAVERO: “En la actual organización de la sociedad, resulta un dato incuestionable la intervención preponderante de las personas jurídicas en el tráfico jurídico-patrimonial. La empresa ha desplazado claramente a la figura del comerciante individual en el terreno de la economía, lo que ha llevado no sólo a que la normativa jurídico, privada tenga en cuenta desde hace tiempo este fenómeno, sino que el propio

Derecho penal se plantee en la actualidad la necesidad de considerar a la persona jurídica en sus criterios de imputación de responsabilidad.<sup>27</sup>”

La creciente división del trabajo conduce, de un lado, a un debilitamiento de la responsabilidad individual y de otro lado, a que las entidades colectivas sean consideradas, en base a diversos fundamentos, responsables (también en el orden fiscal y civil), en lugar de las personas individuales. Esta “colectivización” de la vida económica y social sitúa al Derecho Penal ante problemas novedosos. En este sentido, la sociología enseña que la agrupación crea un ambiente, un clima que facilita e incita a los autores físicos (materiales) a cometer delitos en beneficio de la agrupación. De ahí la idea de no sancionar solamente a estos autores materiales (que pueden cambiar y ser reemplazados), sino también y, sobre todo, a la agrupación misma. De otra parte nuevas formas de criminalidad como los delitos en los negocios (comprendidos aquéllos contra el consumidor), los atentados al medio ambiente y el crimen organizado, colocan a los sistemas y medios tradicionales del Derecho penal frente a dificultades tan grandes que resulta indispensable una nueva manera de abordar los problemas. No es casual que el legislador, en Europa continental haya admitido, desde los años 20 en que nace el derecho económico moderno, algunas excepciones al dogma pseudo romano “*Societas delinquere non potest*” (por ejemplo en materia fiscal, aduanera o de competencia). En la realidad de nuestros días, la mayor parte de los delitos en los negocios o socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa, y el crimen organizado se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas:

---

27.- LAS MEDIDAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO\*Percy García Cavero Profesor de Derecho penal Universidad de Piura

establecimientos financieros, sociedades de exportación o de importación, etc., estas nuevas formas de criminalidad (económica) han obligado a preguntarse si las actuales excepciones no deben convertirse en regla, pues es poco convincente, considerada la realidad y los demás subsistemas del derecho, que por ejemplo el atentado contra el medio ambiente cometido por una gran empresa sea comprendido como un hecho de una sola persona natural; la que lo ordenó o ejecutó una determinada medida.

La responsabilidad penal plena de las agrupaciones existe, entre otros, en el derecho inglés, escocés, irlandés, holandés, noruego, norteamericano (comprendiendo el derecho canadiense) y australiano. Es el caso, igualmente del derecho francés, desde la adopción del nuevo Código Penal. Según la opinión del Consejo Constitucional Francés, dicha responsabilidad se admite solamente con relación a los casos expresamente previstos en la ley o reglamento (como por ejemplo la estafa y las falsedades documentales). La misma técnica legislativa se empleó en el Código Penal portugués del 1982. En el mundo anglosajón Inglaterra y Estados Unidos, por razones más bien pragmáticas y de política criminal, han ido introduciendo de manera progresiva, desde mediados del siglo XIX, la responsabilidad penal de las personas morales.

Se comprueba fácilmente que son, sobre todo los ordenamientos jurídicos, inspirados en un pragmatismo, los que establecen la plena responsabilidad penal de las agrupaciones sin gran consideración de los obstáculos dogmáticos (excepción Japón). Obstáculos que predominan en los países con un fuerte pensamiento dogmático penal, tales como Alemania, España, Grecia e Italia. Lo mismo sucede en los países influenciados por esta corriente de pensamiento, como es el caso de los países de América Latina (como el caso nuestro Perú). Existe pues

para resumir un contraste entre las necesidades de política criminal y las posibilidades de la dogmática penal tradicional.

El sistema penal en un orden democrático ha de partir de un presupuesto básico: la dicotomía entre la libertad y el poder. Desde esta perspectiva el sistema penal surge como un sistema de trincheras garantistas cuyo objetivo es la exclusión de la arbitrariedad. Se constituye, de esta forma, como la Carta Magna de la persona, y no del delincuente. El castigo penal sólo puede surgir de la aplicación de un modelo que excluya la arbitrariedad tanto del legislador en el proceso de creación de la norma, como la del juez en el de su aplicación.

## **CAPITULO IV**

### **4. TRATAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO.**

#### **4.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DELAS PERSONAS JURÍDICAS.**

Tradicionalmente se conocen dos teorías con respecto a las personas jurídicas, con la consecuente implicancia con respecto a la responsabilidad que les puede caber. Estas son la teoría de la ficción y la de la realidad.

La teoría de la ficción, postulada por SAVIGNY, establece que las personas jurídicas no tienen un ser real, son creaciones del derecho. La ficción viene a constituir un instrumento técnico que sólo el legislador puede emplear, en la que se considera a una asociación de personas o a un conjunto de bienes como una unidad, tratándola como una persona, sujeto de derecho. Sin embargo, estas agrupaciones, al no tener voluntad, su status jurídico sería el de un incapaz relativo, que necesita perfeccionar sus actos con la concurrencia de otra perfectamente capaz: la persona natural.

Esta teoría se inspira en el principio romano “Societas Delinquere Non Potest”, las personas jurídicas no pueden ser censurables, según el cual por los delitos cometidos en el seno de la persona jurídica, responde aquel sujeto que en su representación actúa. Esta doctrina es seguida en países como Alemania e Italia, que sólo contemplan sancionarlas personas jurídicas a través sistemas administrativos.

La teoría de la realidad, concebida por GIERKE, plantea que la persona jurídica debe ser concebida como un ser colectivo real. Formado por hombres reunidos y organizados en una existencia conjunta, que tiende a la consecución de fines que trascienden la esfera de los intereses individuales, mediante la común y única fuerza de voluntad y acción. Así, esta teoría reconoce a las personas jurídicas voluntad



propia y, por ende, los entes colectivos no son una mera proyección de las personas naturales que los conforman sino una específica y autónoma realidad, independiente de toda intervención del Estado, por lo que su reconocimiento es meramente declarativo.

FRANZ VON LISZT defendía esta tesis sosteniendo que la persona jurídica es un medio especialmente peligroso para servir de instrumento a aquellos que pretendieran enmascararse tras ella.

Esta teoría es seguida por cada vez por más países, entre los que podemos mencionar a Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Francia, Portugal, Estados Unidos, Finlandia, Japón y Noruega.

#### **4.2. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL.**

Dentro de las democracias reconocidas por las Naciones Unidas existen dos amenazas a la seguridad mundial: el terrorismo y la criminalidad organizada. En este proceso de internacionalización de la empresa, ésta se ha convertido en un instrumento clave de la criminalidad organizada (criminalidad como empresa), vinculada a la criminalidad de empresa (criminalidad económica) y a la corrupción política, sin olvidar al terrorismo. En todos estos casos, la utilización de empresas, sociedades, asociaciones, en fin, personas jurídica, evidencian la manipulación de estas para la realización de actividades ilícitas que lesionan bienes jurídicos reconocidos, como fundamentales para la sociedad, por eso surge el interés de la comunidad internacional de penalizar la responsabilidad de las personas jurídicas.

La Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional de 2000, en su artículo N° 10 establece que: “Cada Estado adoptará las medidas necesarias, de conformidad con sus propios principios, a fin de establecer

la responsabilidad de las personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. La última parte del precepto establece: Cada Estado velará para que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionada y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas”. En esta regulación, al tener como destinatarios a países de distinta tradición jurídica, se ha optado por dejar a cada Estado la selección de la naturaleza de dichas sanciones. En el ámbito de la Unión Europea la Decisión marco relativa a la lucha contra la criminalidad organizada de 2008/841 JAI del Consejo del 24 de octubre de 2008, también incide en la responsabilidad de las personas jurídicas, dedicando dos artículos al tema, uno sobre la responsabilidad de esta y, otro, sobre las sanciones aplicables. El artículo N° 5 establece que: “Todos los Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos mencionados en el artículo N° 2”. Esto es del delito de participación en organización criminal. Es decir, se considera que las personas jurídicas pueden ser autores del delito de participación en organización Criminal. El artículo 6 establece las sanciones que se les puede aplicar, señala: Todos los Estados miembros adoptaran las medidas necesarias para que toda persona jurídica a la se haya declarado responsable con arreglo al artículo N° 5 apartado 2, sea sancionado con sanciones o medidas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

La normativa internacional contra la corrupción se ocupa especialmente de la responsabilidad de las corporaciones. Es significativo el artículo N° 2 del Convenio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre lucha contra la corrupción de los agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 1997, que establece: “Cada Estado parte tomara las medidas

necesarias conforme a sus principios jurídicos para establecer la responsabilidad de las empresas morales en caso de corrupción de un agente público extranjero”. El artículo 18 del Convenio criminal sobre la corrupción del Consejo de Europa de 1999 se ocupa de establecer una disposición en sentido similar. Así se advierte que los textos internacionales no refieren explícitamente la existencia de una responsabilidad penal, pero si postulan a establecer las medidas necesarias para que la persona jurídica responda por los delitos cometidos en su seno o frente a su mediatización.

En el caso peruano está pendiente la consolidación del Estado en sus compromisos internacionales, en torno a los cuales el Perú mantiene un compromiso vigente, así tenemos: La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, adoptada por el Perú el 19 de diciembre de 1988 y que entra en vigor el 14 de abril de 1992. La Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por el Perú el 28 de marzo de 1996, que entre en vigor el 03 de julio de 1997. La Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios, adoptada por el Perú el 14 de noviembre del año 2000, firmada el 13 de diciembre del año 2000 y que entre en vigor el 28 de setiembre de 2003. Estos instrumentos internacionales están ligados en su contexto a la propuesta legislativa de adopción de medidas para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en torno a los hechos delictivos actuales y complejos

Por su parte el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norte América, en su sección B:Anti-Corrupción, artículo N° 19.9 Medidas Anti-Corrupción, en el numeral N° 3, señala: "En caso de que, según el ordenamiento jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las empresas, la Parte velara porque las empresas estén sujetas a sanciones eficaces,

proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones pecuniarias, para cualquiera de las ofensas descritas en el párrafo N° 1 (corrupción, soborno, en el comercio y la inversión internacional).

Asimismo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) señala que establecer la responsabilidad de las personas jurídicas es la medida más eficaz y uniforme para combatir el delito de cohecho a funcionario público extranjero en transacciones internacionales. En tanto, entre los delitos de corrupción en los que participan recurrentemente funcionarios públicos en todos los países, se encuentran aquellos en los cuales las personas jurídicas están involucradas

#### **4.3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO COMPARADO.**

##### **4.3.1. EN LATINOAMÉRICA.**

En Latinoamérica se observa de manera clara un avance hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En general los motivos de este progreso son: (1) iniciativa propia de algunos gobiernos ante escándalos de corrupción, especialmente si involucraron a empresas privadas y (2) como por cumplir con las convenciones internacionales ratificadas<sup>28</sup>.

Si bien hay países que aún permanecen con la responsabilidad penal radicada en el representante de la persona jurídica, el avance se evidencia con claridad. En muchos ya se han producido las reformas legislativas (por ejemplo España, Chile). En otros, hay proyectos de ley con distinto grado de progreso en el trámite parlamentario. (Por ejemplo Perú).

---

28.- AROCENA, Luis F. y García Elorrio, Juan P. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Encuentro Regional Sobre Responsabilidad Del Sector Privado En La Lucha Contra La Corrupción. Bogotá, República de Colombia, 7 y 8 de marzo. 2013

Dentro de los países que ya legislaron la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se encuentran Venezuela y Bolivia. En Venezuela el 7 de abril de 2003 entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción, que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Allí se aclara, desde un principio, en su artículo N° 2, que “están sujetos a esta Ley los particulares, personas naturales o jurídicas y los funcionarios públicos en los términos que en esta Ley se establecen”. En Bolivia la legislación es más reciente, el pasado 1 de abril de 2010 se ha promulgado la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”. Ésta establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y tiene por objeto prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado.

A continuación se señalan con más detalle las legislaciones de Argentina, Chile, Costa Rica para ejemplificar cómo en el derecho comparado latinoamericano se ha establecido la responsabilidad de las personas jurídicas.

#### **4.3.2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ARGENTINA.**

En Argentina si bien el derecho penal ha seguido la tradición romana “*Societas Delinquere Non Potest*”, encontramos varios ejemplos de cómo el legislador penal ha optado, en distintas oportunidades, por otorgar responsabilidad penal directa a las personas jurídicas. A continuación

mencionaremos algunas de estas normas presentes en la legislación actual.<sup>29</sup>

**A).- Régimen Penal Cambiario:** La ley nacional N° 19.359, Artículo N° 8, tercer párrafo, dispone en su Artículo N° .2, inc. f): “Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, *la persona de existencia ideal también será sancionada* de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e)” ; esto es, “multa de hasta diez veces el monto de la operación en infracción, la primera vez” (inc. a) “...suspensión hasta diez años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta diez para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios” (inc. e). La ley apuntada es de jurisdicción federal (Artículo N° 8, Párrafo N° 3).

**B).- Ley sobre Abastecimiento:** La ley nacional N° 20.680, artículo N° 8, dispone: “Cuando las infracciones que se penan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de *condena de una persona*

---

29.- BACIGALUPO, Silvina “Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas Editorial Hammurabi SRL Buenos Aires  
Julio 2001

*jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado.* Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades, que no hubieren participado en la comisión de hechos punibles, pero que por sus funciones debieron conocerlos y pudieron oponerse, serán también pasibles -cuando se les probare grave negligencia al respecto- de las sanciones previstas en el artículo N° 5, incisos a) y b) disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer”.

**C).- Delitos aduaneros:** La ley nacional N° 22.415, de jurisdicción federal, en su Artículo N° 888, dispone: “Cuando una *persona de existencia ideal fuere condenada* por algún delito aduanero e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto no fuera satisfecho su importe, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquélla por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición”.<sup>30</sup>

**D).- Defensa de la competencia:** La ley nacional N° 25.156, de jurisdicción federal (Artículo N° 58), en su Artículo N° 47, establece: “*Las personas jurídicas de existencia ideal son imputables por las conductas*

---

30.- BANCHIO, Pablo R. Apuntes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Revista Argentina de Derecho Empresario. Mayo. 2006. Argentina.

*realizadas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre*, con la ayuda o en beneficio de la persona de existencia ideal, y aun cuando el acto hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz”. Por su parte, el artículo N° 48 agrega: “Cuando las infracciones previstas en esta ley fueron cometidas por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales de dicha persona de existencia *ideal* que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción. En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno a diez años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas en el párrafo anterior”.

#### **4.3.3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN CHILE.**

La Ley N° 20.393, del 2 de diciembre de 2009, consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales que hubieren participado en la comisión del delito, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a un funcionario público extranjero.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo expresando como motivaciones la prevención y detección de estos delitos, así como la tendencia internacional y compromisos asumidos por Chile. La norma está concebido desde un principio como excepción a la regla general establecida por el artículo N° 58 del Código Procesal Penal que establece que la responsabilidad penal solo



puede hacerse efectiva a las personas naturales. A efectos prácticos, esta ley responde directamente a una de las recomendaciones establecidas por la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE) para el ingreso de Chile con membresía plena.<sup>31</sup>

Se destaca sobre todo en Chile la Ley sobre “Responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho”. Aquí, siguiendo en especial el modelo italiano del Decreto Legislativo N° 231149, se trata de obligar a las personas jurídicas de Derecho privado y a las empresas públicas creadas por ley (Artículo N° 2) a prevenir la comisión de delitos, en interés o provecho de la persona jurídicas, por parte de sus empleados inferiores como superiores que tengan “deberes de dirección y supervisión”, a través de la instauración de “modelos de organización, administración y supervisión” para prevenir delitos (Artículo N° 3, tercer párrafo). La persona jurídica quedará exenta de pena solamente en caso de contar con estos “modelos de prevención”, en la forma prevista en el extenso Artículo N° 4 (que diferencia según la complejidad de la persona jurídica, señala los requisitos de estos modelos, entre otros, su “certificación” por empresas de auditoría externa). Pero la ley parece partir de una “responsabilidad subsidiaria” de la persona jurídica. Por un lado, excluye tal responsabilidad penal cuando “las personas naturales... hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero” (Artículo

---

31.- HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. Chile

Nº 3, último párrafo). Pero, más allá de esta regulación razonable, más adelante se dice que la “responsabilidad autónoma” de persona jurídica solamente existiría en casos (por lo demás evidentes) de extinción de la responsabilidad penal individual, del sobreseimiento temporal del proceso contra el imputado individual, y cuando pese a la comprobación de la existencia del delito, no se pudiere establecer responsabilidad individual (Artículo Nº 5). En lo relativo a las penas, la ley establece una regulación muy detallada. Por un lado existen reglas generales (Artículos Nº 9 a 14), donde se definen las penas principales (disolución de personería jurídica, prohibición de contratar con el estado, pérdida de beneficios fiscales, multa), penas accesorias (publicación de la sentencia condenatoria, comiso de ganancias y efectos), por otro lado, también se tiene una serie de criterios para la determinación de la pena (Artículos Nº 15 y ss.): penas específicas según se trate de “crímenes” o “simples delitos”, continuación de la responsabilidad penal en caso de transformación de la persona jurídica procesada o condenada, atenuantes y agravantes, etc. Por último también se prevén disposiciones específicas sobre el procedimiento penal (Artículo Nº 21 y siguientes.).

#### **4.3.4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN COSTA RICA.**

En el año 2008 se modificó, a través de la Ley Nº 8630, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422, adicionando el artículo Nº 44 que establece sanciones a las personas jurídicas.

#### **4.3.5. EN NORTEAMÉRICA, EUROPA, OCEANÍA, ÁFRICA Y ASIA.**

En los últimos veinte años, muchos países han seguido la tradición anglosajona de consagrar la responsabilidad penal de personas jurídicas.

Sin embargo, mucho antes, alrededor del 1900, las cortes de Inglaterra y los Estados Unidos establecieron dos teorías distintas para sancionar penalmente a entes. Ambas ya fueron enunciadas al comienzo de este trabajo. De todos modos, resulta apropiado expandir brevemente los conceptos. Así, en Inglaterra se creó la Teoría *de Identificación*: los actos y estado mental de ciertos empleados (“las mentes dirigentes”) son los actos y estado mental de la entidad correspondiente. Los Estados Unidos, a su vez, aplicó la *Responsabilidad Vicaria*: un ente es responsable indirectamente por los delitos de cualquier empleado o agente si los hizo dentro del ámbito de su autorización, y por el beneficio del ente. Aunque pocos países incorporaron estas teorías al principio, la influencia cada vez mayor de las empresas ha derivado en que muchos Estados adopten alguna forma de responsabilidad penal de personas jurídicas. En general, no se trata de que éstos Estados simplemente estén copiando las teorías anteriores, sino que están desarrollando nuevas formas de responsabilizar a las empresas reconociendo su carácter especial.

Así, varios países han eliminado el requisito de identificar un empleado culpable para sancionar a la empresa. En algunos Estados escandinavos, una empresa puede ser culpable sólo si no hubiera hecho esfuerzos razonables para prevenir el delito. En Australia, el fiscal puede procesar una empresa con la teoría de que la cultura corporativa facilitó el delito. Estos ejemplos destacan

una tendencia a combatir los delitos económicos -especialmente los relacionados con la corrupción- a través de medidas capaces de sancionar a organizaciones tan complejas como las empresas internacionales.

Abajo describimos en más detalle la responsabilidad penal de personas jurídicas en cuatro países: los Estados Unidos, Australia, Francia y Sudáfrica. Después ofrecemos un cuadro que muestra la tendencia en muchos países de usar la ley penal para sancionar a personas jurídicas y que en el presente trabajo va como anexo

#### **4.3.6. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.**

Estados Unidos tiene una tradición bien establecida de sancionar criminalmente personas jurídicas. En 1909, La Corte Suprema declaró en una decisión sobre el soborno de clientes del ferrocarril (*New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States*, 212 U.S. 481), la regla de la responsabilidad vicaria (*respondeat superior* en latín), la cual aún hoy se aplica. Efectivamente, si un empleado o agente de una empresa comete un delito dentro del ámbito de su autorización, y para el beneficio de la empresa, la misma puede ser responsable por el delito también. Fundado en que son las empresas quienes a menudo reciben los beneficios de los crímenes cometidos por sus empleados y agentes. La Corte explicó que las leyes penales no pueden ser eficaces sin la responsabilidad criminal de las personal jurídicas.

Actualmente, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas tiene una gran cobertura incluyendo crímenes de la corrupción-, y el gobierno la utiliza agresivamente. Una empresa es responsable por la acciones de cualquier empleado, y las cortes pueden añadir los conocimientos parciales de varios

empleados para imputar un conocimiento completo a la empresa (*e.g.*, *United States v. Bank of New England, N.A.*, 821 F.3d 844 (1st Cir. 1987)). Además, las consecuencias de una condena criminal para una empresa son tan severas, incluyendo cientos de millones de dólares en multas y la retirada de licencias, que pueden derrumbar una empresa<sup>32</sup>. Para evitar este riesgo, las empresas normalmente cooperan con el gobierno, pagando multas menores y haciendo investigaciones internas para facilitar el enjuiciamiento de los empleados culpables.

#### **4.3.7. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN AUSTRALIA.**

En 1995 Australia reformó la responsabilidad criminal para las personas jurídicas en una manera que reconoce la identidad de la empresa más allá de sus empleados individuales. El ítem 2.5 del Código Penal establece que una empresa es responsable por un delito de cualquier empleado si permitió el delito explícita o implícitamente.

Una manera de mostrar esta culpabilidad es la tradicional: un funcionario de alto nivel hizo o autorizó los actos criminales. Sin embargo, una empresa también puede ser culpable si su “cultura” fomentó la falta de conformidad con la ley o falló en la prevención del delito. La definición de “cultura de la empresa” es muy amplia, incluyen actitudes, normas, reglas, y líneas de conducta o práctica (en general o del área donde las actividades ilícitas ocurrieron). Este énfasis en el nivel organizativo es un gran cambio del sistema anterior, que sólo se fijaba en los actos de los directores de la empresa.

---

32 La condena y el fallecimiento de Arthur Anderson en 2002 por su papel en el fracaso de Enron es un ejemplo.

Esta versión moderna de la responsabilidad de las personas jurídicas combina con las leyes contra el soborno para impulsar la adopción de sistemas de auto-conformidad. Australia en 1999 aprobó una ley llamada *La Ley Sobre el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros*. Ella prohíbe los pagos ilegítimos a funcionarios públicos extranjeros para que ellos ejecuten sus oficios en una manera particular. Si un soborno fue pagado por un empleado de un nivel bajo, la empresa todavía puede ser responsable criminalmente si no tenía un sistema eficaz para prevenir estos tipos de delitos. En efecto, la actual ley combate la tendencia de las empresas de culpar a los empleados menores, y evadir con ello su responsabilidad por fomentar o permitir actos ilícitos.

#### **4.3.8. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN FRANCIA.**

El ejemplo de Francia simboliza la tendencia de Europa Occidental hacia el establecimiento de la responsabilidad criminal de personas jurídicas. Por siglos Francia, como sus vecinos, siguió el principio en latín *-Societas delinquere non potes-* que las personas jurídicas no pueden ser reprochables penalmente. No obstante, durante los 80s, la Nación sufrió varios escándalos corporativos; donde distintos especialistas del país comenzaron a discutir sobre la posibilidad de que estas organizaciones de la sociedad puedan ser condenadas por el Estado. En la reforma del Código Penal de 1992, Francia codificó la responsabilidad de personal jurídicas en el artículo N° 121- 2. Para sancionar a una entidad, esta ley requiere tres elementos: (1) la legislatura ha establecido un crimen substantivo que aplica a entidades; (2) un representante u órgano de la entidad hizo este delito, y (3) lo hizo para el

beneficio de la entidad.

Un juez francés puede elegir entre una variedad de castigos para sancionar a una empresa culpable. En la mayoría de casos, una empresa culpable recibiría una multa cinco veces mayor que la multa para personas naturales, con aumentos para delitos repetidos. Sin embargo, en un caso extraordinario, un juez puede imponer varios castigos no monetarios, incluyendo: supervisión judicial de la empresa; prohibición temporal en la oferta de bonos financiados públicamente; límites en el uso de cheques y crédito para hacer pagos; decomiso de bienes que facilitaron, o fueron derivados, del delito; publicación del delito; y, en casos extremos, la disolución de la entidad.

#### **4.3.9. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESPAÑA.**

El legislador español, siguiendo la técnica legislativa que comenzó con el Código Penal de 1995, ha sido bastante más restrictivo, limitándose a castigar a las personas jurídicas en relación a un listado concreto de delitos, que en su mayor parte coincide con las obligaciones que se derivan tanto de convenios internacionales, como de Decisiones marco de la UE.

Así en el sistema Español la responsabilidad penal de la persona jurídica quedó regulada en el Artículo Nº 31.1 del Código penal establece dos supuestos en los que una persona jurídica resulta responsable<sup>33</sup>:

---

33.- DIEZ RIPOLLES, José Luis "Sistemas de imputación de responsabilidad penal a personas jurídicas – Responsabilidad penal de las personas jurídicas: regulación española Págs.133 al 164. En libro Homenaje al Profesor José Hurtado Pozo El Penalista de Dos Mundos.

- **A).- Artículo N° 31.1 primer párrafo:** la persona jurídica resulta penalmente responsable cuando el delito sea cometido por los (1) administradores y representantes legales, de hecho o de derecho, (2) en su provecho, y (3) en nombre o por cuenta de las mismas, la persona jurídica resulta penalmente responsable.
- **B).- Artículo N° 31.1 segundo párrafo:** la persona jurídica resulta penalmente responsable si el delito se comete por persona distinta a las anteriores por una persona que está sometida a la autoridad, cuando se demuestre que los hechos se han realizado porque los administradores de hecho o de derecho no han ejercido el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso (1), en su provecho (2) y en nombre o por cuenta de las mismas.

Del tenor literal del Artículo N° 31.1 parece desprenderse dos supuestos claramente diferenciados de imputación. Conforme al primero, si la persona natural que comete el delito es un administrador de hecho o de derecho, la persona jurídica responde de manera inmediata, con tan solo probar que el administrador haya actuado en su provecho y por cuenta y nombre de la misma. En cambio, cuando se trata de un subordinado el Artículo N° 31 bis.1, en su segundo párrafo, requiere demostrar además que los administradores no han ejercido el debido control atendidas las concretas circunstancias. Este sistema proviene casi literalmente de las Decisiones marco de la UE que ha transpuesto la LO 5/2010. Desde el Segundo protocolo relativo a la protección de los intereses financiero de la UE, en 1997, la armonización europea ha pivotado siempre sobre este modelo diferenciado.



#### **4.3.10. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN SUDÁFRICA.**

Sudáfrica tiene una ley de gran alcance para sancionar a las personas jurídicas, parecida a la que se aplica en Estados Unidos. La Ley del Proceso Penal N° 51 de 1977 establece, en la sección N° 332, que las entidades pueden ser procesadas por los delitos de sus empleados. La responsabilidad de personas jurídicas cubre todas las leyes penales, con pocas excepciones. Para determinar si una empresa es culpable, Sudáfrica utiliza el estándar de responsabilidad vicaria, si cualquier empleado o agente de la empresa hizo el delito dentro del ámbito de su autorización y para el beneficio de la empresa la responsabilidad será imputada a la entidad.

El enjuiciamiento de una persona jurídica en Sudáfrica es parecido al enjuiciamiento de una persona natural. El fiscal tiene discreción si va a procesar una entidad, y puede retirar el caso en cualquiera etapa del procesamiento. Un director de la empresa, en su capacidad representativa, debe ser juzgado en nombre de su organización. Como representante de la entidad, el director tiene todos los derechos que cualquier otro acusado. Y cualquier documento hecho por un empleado o agente de la entidad dentro de su ámbito de autorización puede ser admitido contra la empresa. Si el juez determina que la firma es culpable, normalmente tiene discreción en fijar la cifra de la multa y ordenar el decomiso de la propiedad que facilitó o fue el fruto del delito.

## CAPITULO V

### 5. FUNDAMENTOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

#### 5.1. FUNDAMENTOS EN CONTRA DE LA RESPONSABILIDAD.

Existen aún posiciones que siguen aferrándose al dogma del “*Societas Delinquere Non Potest*”, es decir en la no responsabilidad de las personas jurídicas, pero en lo que sí están de acuerdo o por lo menos no hay cuestionamientos trascendentes es en el tema de la responsabilidad tanto en el Derecho Civil como en el Derecho Administrativo. El fundamento de esta posición lo constituye la afirmación dogmática penal de que las personas jurídicas no son responsables penalmente, respondiendo en todo caso solo las personas físicas que hayan realizado el hecho punible, ya que se sostiene que “la capacidad de acción, de responsabilidad y de pena exige la presencia de una voluntad entendida como facultad psíquica de la persona individual, que no existe en la persona jurídica, por constituir un mero ente ficticio al que el Derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales”.

El dogma a tenor del cual las personas jurídicas no podían cometer delitos (*Societas delinquere non potest*) estaba estrechamente conectado con la forma de entender la culpabilidad y la pena que surgen en el siglo XIX. Cuando se dice que una persona actúa culpablemente se entiende que ha realizado un hecho delictivo, cuando le era posible actuar de otro modo, esto es, conforme al ordenamiento. En estas circunstancias, con la imposición de la pena el ordenamiento manifiesta un reproche a esa concreta persona. Esta idea es la que el derecho penal del siglo XIX quería indicar mediante el principio de personalidad de las penas, que vinculaba la pena a una culpabilidad individual. Fue una forma de reaccionar ante la sanción a colectivos (por ejemplo, un municipio o una familia) que había sido muy frecuente durante toda

la Edad Media y el Antiguo Régimen. Más modernamente la responsabilidad colectiva reapareció en los ordenamientos fascistas europeos, italiano y alemán, bajo la forma de responsabilidad familiar. La imposición de una sanción a la persona jurídica significaba para muchos una forma de responsabilidad colectiva contraria al principio de personalidad de las penas, que acababa castigando a socios inocentes, sin ninguna responsabilidad en los hechos.

Un segundo bloque de argumentos teóricos en contra de la responsabilidad de personas jurídicas provenía de la forma de entender la esencia del delito, que a lo largo de la historia básicamente se ha concebido de dos formas. Una centrada en la causalidad: un comportamiento humano que pone en marcha un curso causal que produce la lesión del bien jurídico.

Otra centrada en la finalidad: donde cobra protagonismo la intención del autor, el dolo, dirigida a la lesión del bien jurídico. Encajar la responsabilidad de las personas jurídicas dentro de cualquiera de estas dos formas de entender la esencia de un comportamiento delictivo resultaba poco menos que imposible. Pues evidentemente, una persona jurídica ni tiene voluntad en el sentido del concepto de acción final, ni tiene capacidad de poner en marcha un curso causal.

Por lo tanto, si pudiéramos resumir los cuestionamientos acerca de la posibilidad de reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: su incapacidad de acción, de culpabilidad, así como la no posibilidad de aplicación de alguna pena. Lo que toca en la actualidad a aquel doctrinario adscrito a negar el dogma "*Societas Delinquere Non Potest*", es elaborar una extensión de los contenidos de los conceptos de acción, culpabilidad y capacidad de pena de la propia persona jurídica, elaborando nuevas concepciones respecto a estos temas a fin de aplicarlos en modo exclusivo, y así poder imputar la comisión de algún hecho punible a una persona

jurídica.

Esta posición resulta ser la dominante en países de influencia hispánica, soliendo fundamentar en los conocidos argumentos de incapacidad de acción, incapacidad de culpabilidad e incapacidad de pena, ya que las formulaciones expuestas terminan siempre remitiéndose a la persona física con lo que se demuestra que sólo esta puede ser destinataria de la norma, sujeto de una infracción y de la sanción, de allí su rechazo a cualquier intento destinado a conceder responsabilidad administrativa y/o penal a las agrupaciones.

En consecuencia, en estas legislaciones, que todavía deben ser la mayoría, cuando se cometiere un hecho delictivo (p. ej. un delito ecológico, un fraude de inversiones de capital, un fraude tributario, una práctica restrictiva de la competencia, una práctica de competencia desleal, etc.), en interés de un ente colectivo o motivado por éste a través de una cultura corporativa criminal, pese a que se pudieren causar graves perjuicios a intereses sociales importantes, en lo esencial solamente será punible el o los individuos que hubieren ejecutado los hechos, siempre que puedan ser identificados y se dieran los demás elementos del tipo.

## **5.2. FUNDAMENTOS A FAVOR DE LA RESPONSABILIDAD.**

Conforme hemos expuesto durante el desarrollo del presente trabajo, existe un significativo avance en la legislación comparada e internacional por regular la admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo importante el avance doctrinario que sustenta la procedencia de la capacidad de los entes colectivos para ser pasibles de sanción penal por los actos realizados.

Los autores que han desarrollado la problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas reconocen que aunque el sistema de teoría del delito plasmado en las codificaciones vigentes no es aplicable a las personas morales, es posible adoptar

un *sistema de doble imputación* que permita la imputación individual como la imputación del hecho punible al ente colectivo. La adopción de un sistema de doble imputación, por cierto, no resulta cuestión novedosa en el plano legislativo comparado conforme se observa, por ejemplo, en el Código penal francés, y en el proyecto de Código para Iberoamérica.

Los argumentos favorables a la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas son sobre todo de carácter pragmático, esto es, que para la protección de determinados bienes jurídicos resulta más eficaz sancionar conjuntamente con las personas naturales a las personas físicas. Estos argumentos son los siguientes:

El primero de ellos y más clásico es que el derecho penal individual pierde “fuerza” cuando se aplica en el interior de una empresa. Esta pérdida de energía se debe a que: En ocasiones no es posible encontrar una persona natural que pueda ser declarada internamente responsable del delito. La organización de trabajo de las empresas implica que cada uno desempeña una labor determinada, pero a veces nadie es responsable del resultado final.

A veces sí que existe un claro responsable, pero la justicia penal tiene dificultades para aclarar quién es y juzgarlo. Las empresas, como cualquier corporación, son especialistas en buscar y fabricar “chivos expiatorios”, que van responder por lo ocurrido liberando del resto a todos, aunque no hayan sido totalmente ajenos al hecho delictivo. En otras situaciones el grupo se cierra y pone todos los obstáculos a su alcance para que el proceso penal no descubra al verdadero responsable.

Desde hace tiempo se indica que la existencia de una corporación constituye bajo determinadas circunstancias un factor criminógeno, en el sentido de que provoca comportamientos delictivos por parte de las personas naturales, comportamientos que de manera aislada no hubieran cometido. En determinadas empresas surge lo que

se denomina un “espíritu criminal de grupo”. Inmersos en él administradores, directivos y empleados acaban considerando que es mucho más importante la lealtad a la empresa y la búsqueda de su beneficio, que el respeto a la ley. La importancia de la empresa sirve para neutralizar los valores o principios éticos que normalmente les detrae de la comisión de hechos delictivos.

A estos argumentos “clásico”, se suma otro mucho más moderno. El poder de las corporaciones es hoy en todo el mundo mucho mayor que hace dos décadas. Existen gigantes empresariales cuyo volumen de negocios es mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países y que además gracias a la globalización puede escoger el ordenamiento más favorable a sus intereses. De hecho en los Estados Unidos la responsabilidad penal de las personas jurídicas nace como una forma más de lucha contra el abuso de poder de los gigantes corporativos, que van apareciendo tras la Guerra Civil y la construcción del ferrocarril.

La imposición de penas a la personas jurídicas serviría para compensar estos problemas de aplicación del derecho penal que acaban de enunciarse. Cuando se sanciona a una persona jurídica el mensaje que se le lanza es el siguiente: haz todo lo posible por evitar que en tu interior se cometan hechos delictivos o, en caso de que se cometan, intenta descubrirlos cuanto antes, porque si no serás sancionada. La función del derecho penal es motivar a las personas jurídicas a que adopten medidas de organización internas con el fin de prevenir y detectar la comisión de hechos delictivos. A los administradores de una empresa les es más fácil evitar los hechos delictivos que comentan sus empleados y descubrirlos que al Estado.

Esta estrategia de control parte de una de los postulados básicos de la teoría de la organización empresarial: que la mejor forma de controlar a un colectivo es hacer responsable de lo que en él ocurra sus dirigentes. En una empresa que ha recibido

fuertes sanciones, lo que puede tener también un importante coste reputacional, los socios, estarán mucho más interesados en que sus administradores implementen sistemas de cumplimiento normativo que eviten la imposición de sanciones. Un mundo sin derecho penal es ideal para socios que tienen todo que ganar si se cometen hechos delictivos que de algún modo beneficien a la empresa y poco o nada que perder si son descubiertos. E igual ocurre con los altos dirigentes, que normalmente como antes señalaba, no serán responsables individuales. Este conjunto de ideas constituyen el argumento pragmático más importante en el que descansa la responsabilidad de las personas jurídicas y el que debe estar a la base de un sistema de imputación bien orientado políticamente criminalmente.

Dentro de la doctrina alemana podemos citar al profesor KLAUS TIEDEMANN, para quien si la persona jurídica posee capacidad para celebrar contratos puede, de la misma manera incumplirlos, es decir, puede también actuar de manera ilícita, más aún si se tiene en cuenta que muchas normas jurídicas son aplicables a las personas jurídicas y, por ende, son capaces de producir los resultados exigidos por el tipo.

Las legislaciones de diversos países han aceptado la responsabilidad de las personas jurídicas no sólo en el ámbito del Derecho Administrativo, donde la fundamentación dogmática de la imposición de sanciones administrativas es poco clara, sino también conceden responsabilidad penal a las sociedades.

Existe una dependencia de la culpabilidad del injusto, pues si el injusto se caracteriza por la actividad de una organización defectuosa y la proyección de una ética empresarial insuficiente, ello debe traducirse necesariamente en la culpabilidad, en haber creado las condiciones para la realización del injusto, por lo que, si la persona jurídica estructura correctamente su organización afianzando una cabal ética empresarial, en tal caso no le alcanzará responsabilidad penal alguna.

En vista a lo manifestado, es bueno adoptar una perspectiva política-criminal, que proscriba la impunidad que se advierte en torno a la cada vez más creciente delincuencia empresarial. Por ello, mantener conceptos restringidos y clásicos de Derecho Penal-Parte General, no coadyuva en modo alguno a solucionar la problemática de este tipo de delincuencia.

Sostener la imputación hacia organizaciones, debe ser concebida aisladamente en cuanto a sus presupuestos y consecuencias, de la tradicional concepción acerca de la culpabilidad penal de la persona individual, aplicándose un modelo paralelo al Derecho Penal individual en el que afianzando una culpabilidad de las agrupaciones se logre atenuar el problema de la criminalidad económica organizada, por lo que la culpabilidad de la persona jurídica no es idéntica a la culpabilidad de sus miembros.

### **5.3. LA PROPUESTA DE KLAUS TIEDEMANN: RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL.**

KLAUS TIEDEMANN, uno de los más representativos defensores de la responsabilidad penal empresarial, propone la creación de un sistema de imputación penal de la persona jurídica mediante la reformulación del concepto de acción jurídico penal y la culpabilidad.

#### **A. EL CONCEPTO DE ACCIÓN JURÍDICO PENAL EN LA PROPUESTA DE TIEDEMANN.**

En opinión de TIEDEMANN, sobre la base que proporciona la doctrina proveniente de Inglaterra, Holanda y Norteamérica, las empresas no sólo tiene capacidad de comprometerse legalmente (por ejemplo, a través de un contrato), sino que pueden también incumplir dichos compromisos (incumplir un contrato).



Esta lógica elemental, permite a TIEDEMANN sostener que las personas jurídicas tienen también capacidad de infringir la ley penal<sup>34</sup>.

Como puede deducirse, TIEDEMANN fundamenta la capacidad de acción básicamente sobre la base de su condición de destinataria de los mandatos normativos, los cuales, en ciertas materias como la económica y societaria, pueden ser dirigidos exclusivamente hacia la persona jurídica<sup>35</sup>.

TIEDEMANN reconoce, no obstante, que la persona jurídica es materialmente incapaz de actuar, debiéndose atribuir a ella los actos realizados por las personas naturales que actúan a nombre suyo. Este es justamente uno de los puntos débiles de la tesis de TIEDEMANN, al generar riesgos de posible vulneración del principio de responsabilidad por el hecho propio debido a que a la persona jurídica se le estaría atribuyendo el hecho materialmente realizado por una persona distinta, la persona natural. Frente a estos cuestionamientos, sumamente recurrentes en doctrina, TIEDEMANN responde identificando una serie de mecanismos legales que permiten la imputación por hecho materialmente efectuados por terceros, como ocurre, por ejemplo, en la autoría mediata o en la coautoría<sup>36</sup>.

Los críticos a la propuesta de TIEDEMANN han sostenido que si bien las normas jurídica se encuentran dirigidas también a las personas morales, ello no supone que aquélla deba responder por los delitos cometidos por sus representantes. Frente a éste cuestionamiento, TIEDEMANN responde que el reconocimiento de capacidad de acción de las personas jurídicas por parte del Derecho penal no sería más que la consecuencia lógica del reconocimiento de la persona jurídica como destinataria de

---

34.- Tiedemann, Klaus. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Página 218.

35.- Tiedemann, Klaus. Op. Cit. Página 218.

36.- Tiedemann, Klaus. Op. Cit. Página 219.

las normas de orden extrapenal (administrativas, tributarias, etc.), tal cual ocurre, por ejemplo, en la figura del actuar por otro<sup>37</sup>.

## **B. LA CULPABILIDAD POR DEFECTO DE ORGANIZACIÓN.**

Las personas jurídicas, como es propio también de las personas naturales, tienen el deber de organizarse correctamente. El fundamento de la culpabilidad de la empresa se encuentra en la infracción de dicho deber, es decir, en la organización defectuosa que permite la realización de delitos en el ejercicio de su actividad<sup>38</sup>.

Los defectos de la organización empresarial se encuentran asociados a la omisión de las medidas de precaución indispensables para el funcionamiento regular y, por ende, no delictivo de la persona jurídica. Las medidas de precaución exigibles a la organización empresarial son de vigilancia, control y de organización de la persona jurídica con lo cual, nuevamente, se toma como referente los comportamientos de las personas naturales que actúan a favor de la empresa.

Ahora bien, no se trata tampoco de la culpabilidad por el actuar errado individual de los gestores de la persona jurídica, esto es, un evento aislado atribuible exclusivamente a quienes representan a la persona jurídica, sino de una verdadera culpabilidad de la empresa sustentada en una incorrecta evaluación de los riesgos empresariales<sup>39</sup>.

## **C. PRESUPUESTOS PARA LA IMPUTACIÓN A LA PERSONA JURÍDICA.**

Debido a que el planteamiento de TIEDEMANN tiene como presupuesto la actuación individual, de la cual depende la responsabilidad penal de la empresa, se plantea la

---

37 .- Tiedemann, Klaus. Op. Cit. Página 221.

38 .- Tiedemann, Klaus. Op. Cit. Página 225.

39.- Heine, Günther. La Responsabilidad Penal de las Empresas. Evolución y consecuencias morales. En Hurtado Pozo José/Del Rosel Blasco, Bernardo/Simons Vallejo, Rafael. La responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas. Una perspectiva comparada Valencia Tirant Le Blanch 2001.

cuestión respecto a qué sujetos pueden provocar la responsabilidad penal de la propia empresa.

Ésta interrogante puede ser respondida recurriendo a dos criterios; uno de carácter formal, en virtud del cual sólo se afirmará la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el hecho punible sea ejecutado por sus órganos o representantes legales; el otro de carácter material, que condiciona la responsabilidad penal empresarial a los supuestos de actuación individual en beneficio de la persona jurídica, siendo irrelevante la existencia de un título de representación formal<sup>40</sup>.

TIEDEMANN entiende que resulta conveniente recurrir a un modelo intermedio, similar al reconocido en la legislación inglesa, holandesa, finlandesa o australiana, que permita comprender dentro del halo de individuos cuya actuación determine la responsabilidad penal de la empresa no sólo a quienes poseen la condición de órganos de representación legal, sino a quienes posean *middle management*<sup>41</sup>.

En la doctrina anglosajona y holandesa se afirma que se equipara la actuación criminal del órgano representante de la empresa, siempre una persona física, con la de la empresa<sup>42</sup>. Esta construcción teórica recibe el nombre de **doctrina de la identificación**. La doctrina de la identificación justifica el castigo de la empresa por la actuación de sus empleados. TIEDEMANN sostiene que las personas

---

40 .- Tiedemann, Klaus. Op. Cit. Página 230.

41 .- Tiedemann, Klaus. Op. Cit. Páginas 232-233.

42 .- Tiedemann, Klaus. Ob. Cit. pág. 102 "Si la persona jurídica puede celebrar contratos p. ej. de compraventa es ella quien está sujeta a obligaciones originadas por esos contratos y es ella quien puede violar esas obligaciones. Esto quiere decir que la persona jurídica puede actuar de manera antijurídica"... "Las acciones de las personas naturales que actúen para la empresa deben ser consideradas como las de la empresa". Al respecto también escribe Luis Miguel Reyna Alfaro en Revista Peruana de Derecho de la Empresa pág. 85.

jurídicas, al igual que las físicas, son también destinatarias directas de las normas de conducta, es decir mandatos y prohibiciones y que el derecho positivo parte de ello. Las personas jurídicas tienen capacidad de acción y, por ello, pueden ser destinatarias de las normas de conducta, y si el legislador dirige las normas a las personas jurídicas es porque ellas también pueden producir los efectos exigidos por la norma, es decir, pueden producir acciones u omisiones<sup>43</sup>. Este autor resuelve el tema de la culpabilidad de la empresa mediante el concepto “deficiencia en la organización”, es decir una vulneración al deber de organizarse correctamente, contrario a sus obligaciones de control y vigilancia.

A TIEDEMANN se le critica fundamentalmente porque propone un criterio de culpabilidad por hecho ajeno. Este responde a dicha crítica señalando que en realidad la persona jurídica responde por un hecho propio, o sea, por un hecho que también es suyo, al igual que sucede por ejemplo en el supuesto del coautor o del autor mediato, a quien se le imputa hechos no realizados por él mismo sino por otro coautor o por el instrumento. El defecto de la organización de la empresa, es decir, la omisión de la adopción de medidas de precaución para evitar la comisión de delitos en el ejercicio de la actividad de la empresa, sería el hecho fundamentador de la culpabilidad de la propia persona jurídica. Las medidas de precaución que se infringen son, respectivamente, medidas de deberes de vigilancia,

---

43.- Tiedemann, Klaus. Ob. Cit. Pág. 103 “...no es casualidad que en el mundo anglosajón se haya comenzado a admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de las asociaciones en el campo de los delitos de omisión y los delitos imprudentes porque aquí no cuenta, o no cuenta totalmente, la acción física sino lo que importa es la violación de las medidas y expectativas normativas para imputar un resultado nocivo a una persona natural”

control, y organización, que obligan a la misma agrupación, como tal, siendo por todo ello que la lesión de tales deberes es lesión de deberes de organización y, en consecuencia, no son propios de la persona jurídica

#### **5.4. LA TESIS DE GÜNTHERHEINE: CULPABILIDAD POR ORGANIZACIÓN DEFICIENTE DE LA EMPRESA/ RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL INDEPENDIENTE.**

Al respecto, GUNTER HEINE ha preferido construir “una culpabilidad de las organizaciones fundada en la organización deficiente de la empresa que se origina en la propia empresa de modo independiente a la culpabilidad individual de quienes actúan a favor de la empresa” tal autor pretende crear un sistema de responsabilidad paralelo al sistema individual de responsabilidad. Conforme lo refiere el mismo, la culpabilidad por una organización deficiente no se sustenta en decisiones individuales sino en lo que denomina “una deficiencia duradera en la previsión de los riesgos de explotación”. Para los tratadistas citados se concluye que de una u otra manera todos han buscado una normativización de los conceptos dogmáticos de acción y culpabilidad a fin de fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Cercano al planteamiento de TIEDEMANN se encuentra la formulación de GÜNTHER HEINE de construir una culpabilidad de las organizaciones empresariales que, aunque fundada en la organización deficiente de la empresa, se origina en la propia empresa, de modo independiente a la culpabilidad individual de quienes actúan a favor de la empresa<sup>44</sup>.

El sistema de responsabilidad penal empresarial debe ser construido, conforme al planteamiento de HEINE, de modo paralelo al sistema individual de responsabilidad

---

44 .- Heine, Günther. Op. Cit. Página 66.

penal. La propuesta de HEINE, a diferencia del propuesto por TIEDEMANN, no toma como centro de referencia la responsabilidad penal del órgano de la persona jurídica sino que se enfoca directamente en la persona jurídica. De éste modo se lograría estatuir una culpabilidad empresarial plenamente independiente de la correspondiente a las personas naturales que actúan a favor de la persona jurídica.

Justamente por éste motivo (la menor trascendencia del acto individual) es que resulta conveniente el reconocimiento de la *dimensión temporal* de la organización empresarial. Conforme al planteamiento de HEINE, la culpabilidad por organización deficiente no se sustenta en deficientes decisiones individuales sino en “una deficiencia duradera en la previsión de los riesgos de explotación”, con lo cual ésta sería una especie de “estado de hecho culpable”<sup>45</sup>. De éste modo, la culpabilidad penal de la empresa tendría carácter integral relacionado a la investigación, planeamiento, desarrollo, producción y organización empresarial

La culpabilidad penal de la empresa se encontraría asociada a la condición de garante que aquella posee respecto a los riesgos técnicos que produce. La empresa posee deberes de evitación y control de peligros sustentados en la mayor eficacia de la administración empresarial de los riesgos respecto al control estatal de los mismos.

En el modelo de culpabilidad penal empresarial de HEINE existirían dos presupuestos para afirmar la punibilidad de la persona jurídica: La administración incorrecta del riesgo y la materialización del peligro típico de la empresa. Estos elementos no operan en un mismo nivel: La culpabilidad de la empresa se sustentaría en la incorrecta gestión del riesgo, en tanto que la materialización del peligro típico operaría como una

---

45.- Heine, Günther. Op. Cit. Página 68.

condición objetiva de punibilidad. Entre ambos elementos debe existir una relación de riesgo.

HEINE sostiene que los diversos elementos del delito, como el dolo, la culpa o el conocimiento de la antijuricidad, deben ser valorados desde una perspectiva funcional-colectiva; así, por ejemplo, la imputación subjetiva del hecho a la empresa se sustentaría en el conocimiento que pudieran poseer las áreas legal y de seguridad de la persona jurídica.

## CAPITULO VI

### 6. RESPONSABILIDAD DELA PERSONA JURIDICA EN EL PERU.

#### 6.1. LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN PERÚ.

En el derecho peruano ha regido siempre el principio de *Societas delinquere non potest*, es decir por la no responsabilidad penal de las personas jurídicas siendo la tendencia claramente a la responsabilidad individual, lo que imposibilita que las “actuaciones” de una persona jurídica puedan subsumirse dentro del concepto “acción” recogido en el artículo 11 del Código Penal de 1991, solo pueden ser imputadas las conductas de los administradores y representantes de estas. Esta posición resulta ser la dominante en países de influencia hispánica, solándose fundamentar en los conocidos argumentos de incapacidad de acción, incapacidad de culpabilidad e incapacidad de pena, ya que las formulaciones expuestas terminan siempre remitiéndose a la persona física con lo que se demuestra que sólo esta puede ser destinataria de la norma, sujeto de una infracción y de la sanción, de allí su rechazo a cualquier intento destinado a conceder responsabilidad administrativa y/o penal a las agrupaciones.<sup>46</sup>

El Código penal peruano descarta la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto porque las estructuras dogmáticas sobre las que descansa el estatuto punitivo nacional son de corte claramente individual. En efecto, el artículo N° 11 del Código penal peruano (“Son delitos y faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley), reconoce como presupuesto del hecho punible la existencia de una *acción jurídico penalmente relevante*.

---

46.- HURTADO POZO, J o s é . Manual de Derecho Penal Parte General I 3° Edición GRIGLEY. 2005



Este concepto, tal cual ha sido construido por la dogmática jurídico penal, permite disgregar las acciones en sentido estricto (ontológico material), esto es, aquellas que modifican la conformación exterior del mundo, de aquellas que al Derecho penal le interesa abarcar, esto es, de aquellas que son penalmente relevantes.

En el Código penal peruano la responsabilidad de las personas jurídicas se encuentra como consecuencia accesoria, dentro de la parte general del mismo. En Perú, el artículo N° 105 fue modificado en julio de 2007 por el Decreto Legislativo N° 982, y establece medidas aplicables a las personas jurídicas

Tanto en el código penal de 1863 como en el de 1924 no avizoraba siquiera una responsabilidad de la persona jurídica en donde se considera únicamente a la persona natural como susceptible de imputar delitos. Sin embargo como lo expresa el profesor Hurtado Pozo en el Código Penal de 1924 existe referencia a la posibilidad de la persona jurídica cuando esta se encuentra relacionada a la comisión del delito, este era el caso de la Quiebra fraudulenta.

En el Código Penal de 1991 si bien tampoco se recoge como principio la responsabilidad de las personas jurídicas, si acepta de manera innovadora la aplicación de las denominadas “consecuencias accesorias” reguladas en el artículo 105 de dicho cuerpo de leyes, las que según la doctrina vendrían a ser verdaderas sanciones penales o medidas de seguridad inclinándose la opinión mayoritaria por la primera de las nombradas

## **6.2. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA.**

Pese a lo sostenido, la introducción en el Código penal peruano de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas contenidas en el artículo N° 105 pueden generar ciertas dudas respecto a si suponen auténticas penas o medidas de seguridad para las

personas jurídicas, lo que supondría el reconocimiento implícito de que las personas jurídicas tienen capacidad de culpabilidad o al menos de acción, o si tienen una naturaleza distinta.

En efecto, el artículo N° 105 del Código penal reconoce la posibilidad de aplicar a la persona jurídica una serie de medidas, (disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales, etc.), cuando el hecho punible sea cometido en ejercicio de la actividad de la empresa o cuando se utiliza su organización para favorecerlo o encubrirlo. Sin embargo, la vaguedad del legislador al denominarlas (“consecuencias accesorias”)<sup>47</sup> ha propiciado un intenso debate dogmático que, por cuestiones de pertinencia, sólo podrá ser reseñado en sus términos más elementales.

El carácter punitivo de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas es postulado fundamentalmente por ZUGALDÍA ESPINAR quien sostiene que las consecuencias accesorias del artículo N° 129 del Código penal español “por exclusión” deben ser consideradas auténticas penas<sup>48</sup>.

Desde nuestro punto de vista, la solución de considerar las consecuencias jurídicas del delito verdaderas penas para las personas jurídicas tiene un escollo legal insuperable que impide recurrir al argumento de la exclusión postulado por ZUGALDÍA ESPINAR.

---

47 .- Del Rosal Blasco, Bernardo & Pérez Valero, Ignacio. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y consecuencias accesorias en el Código penal español”. En: Hurtado Pozo, José/ Del Rosal Blasco, Bernardo/ Simons Vallejo, Rafael (Directores). La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: Una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. Página 31.

48 .- Zugaldía Espinar, José Miguel. “Vigencia del principio Societas delinquere potest en el moderno Derecho penal”. En: Hurtado Pozo, José/ Del Rosal Blasco, Bernardo/ Simons Vallejo, Rafael (Directores). La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: Una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. Página 253.

En efecto, el artículo N° 28 del Código penal establece una cláusula cerrada de penas dentro de las cuáles no se encuentra las contenidas en el artículo N° 105 del Código penal. Esta cuestión, sumada a la exigencia de culpabilidad como presupuesto para la imposición de una pena y la incapacidad de culpabilidad de los entes colectivos impiden afirmar que las medidas del artículo N° 105 del Código penal peruano constituyan auténticas penas para las personas jurídicas. Es de reconocer, además, que la imposición de las consecuencias accesorias a las personas jurídicas, conforme al contenido del artículo N° 105 del Código penal, exige no sólo la realización de un hecho punible sino un estado de cosas específico: actitud criminal de la persona jurídica<sup>49</sup>, sin embargo como veremos más adelante nuestra Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario No7-2009/CJ-116, ha establecido que las consecuencias accesorias son verdaderas penas

Por consideraciones similares a las antes desarrolladas en relación a la pena es que debe negarse que las consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica constituyan una especie medidas de seguridad. Primero, porque contradicen el sentido del artículo N° 71 del Código penal que determina como únicas medidas de seguridad previstas por el Estatuto penal el tratamiento ambulatorio y la internación; segundo, porque la calificación como medidas de seguridad exigiría una reformulación total del concepto de peligrosidad criminal.

El fundamento jurídico de las consecuencias accesorias contenidas en el artículo N° 105 del Código penal peruano es la *peligrosidad objetiva* de la persona jurídica y su estructura organizativa<sup>50</sup>. Las consecuencias aplicables a la persona jurídica se imponen cuando aquella constituye una suerte de *instrumento peligroso* al facilitar y

---

49 .- Del Rosal Blasco, Bernardo & Pérez Valero, Ignacio. Op. Cit. Página 38.

50 .- Del Rosal Blasco, Bernardo & Pérez Valero, Ignacio. Op. Cit. Página 36.

encubrir la realización de comportamientos delictivos. Con esto, la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas sería más bien de índole administrativa<sup>51</sup>.

Desde esa perspectiva, no quedan dudas que el Derecho penal peruano enfrenta la criminalidad del ente empresarial recurriendo a las fórmulas de imputación individual desarrolladas por los artículos N° 23 a 27 del Código penal. Esto significa que la represión de un hecho punible cometido en el contexto de una entidad colectiva se logrará, no mediante la sanción a la propia persona jurídica, sino identificando a las personas naturales responsables del mismo, conforme a las reglas de intervención delictiva antes precisadas.

El artículo N° 105 del Código penal de 1991, recoge una diversa gama de medidas contra la persona jurídica sea por ejemplo la clausura de sus locales o establecimientos, la disolución (como una medida de carácter grave), la suspensión de las actividades y la prohibición de realizar en el futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido un delito. Al respecto PERCY GARCÍA CAVERO afirma que dada la vaguedad de la naturaleza jurídica de estas “medidas” no ofrecen un criterio dogmático al juez a fin de determinar en qué casos pueden ser aplicables y en qué medida<sup>52</sup>.

---

51 .- Cercano: Del Rosal Blasco, Bernardo & Pérez Valero, Ignacio. Op. Cit. Página 42.

52 .- García Caverro, Percy. “Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano” artículo publicado en Revista de Derecho, Universidad de Piura. Al respecto refiere que “Es evidente que la respuesta a esta interrogante no solo tiene un interés académico, sino fundamentalmente práctico, pues la determinación de los presupuestos materiales y procesales para la imposición de estas medidas dependerá indudablemente de la naturaleza de la persona jurídica que se le asignen”. Vol. 7-2006. Página Web [http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a\\_20080521\\_81.pdf](http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_81.pdf)

### 6.3. EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO

En la doctrina no hay discusión en interpretar que la finalidad principal de la disposición ha sido la de tratar de evitar vacíos de punibilidad cuando se tratare de *delitos especiales* y el delito fuere ejecutado por personas (individuales) que tuvieran una relación de representación (legal, empresarial) con la representada (persona natural, persona jurídica, agrupación con capacidad jurídica). Pero sí hay discusiones en cuanto a la interpretación y aplicación de los elementos de la norma. Entonces, cuando los elementos típicos (cualidades personales, situaciones o circunstancias especiales) de un delito especial recayeren en una persona distinta de aquélla que ejecutara el delito, el Artículo N° 27 permite abarcar también como autor del ejecutor-representante (“responsabilidad por representación”), pero solamente en los siguientes casos: cuando la representada fuera una “persona jurídica” y el actor fuera un “órgano facultado para representarla” o de un “miembro de dicho órgano” (primer párrafo, número N° 1), cuando la representada fuere una “sociedad de personas con capacidad jurídica” y el actor un “socio facultado para representarla” (primer párrafo, número N° 2), y cuando se tratare del “representante legal” de otro (primer párrafo, número N° 3).

El artículo N° 27 del Código Penal<sup>53</sup>, prevé lo que en doctrina se denomina como el “actuar en lugar de otro”, teniendo como significado la de ser una cláusula de extensión de autoría, en donde permite imputar responsabilidad penal a título de autor a determinados órganos de gestión de una persona jurídica que realizan el supuesto

---

53.- El artículo 27° del Código Penal dice a la letra: “El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurren en él, pero si en la representada”.

de hecho de un delito especial, a pesar de que la cualificación que éste exige no concurre en el órganos de gestión sino en la persona jurídica representada.

Este precepto resultó de suma importancia pues busca colmar una laguna de punibilidad que se presentaba cuando quien actuaba no reunía determinados elementos especiales que requería el tipo del delito especial y en consecuencia no puede ser sancionado. Del mismo modo, la persona jurídica representada no podía ser sancionada por reconocer la incapacidad de los entes colectivos para delinquir, acarreando en consecuencia la impunidad de las personas naturales que en su lugar actuaban debido a la accesoriedad de la participación habida cuenta que el ente colectivo no puede ser considerado autor de un delito. Es un precepto destinado fundamentalmente al Derecho Penal de la Empresa.

La regulación del “actuar en lugar de otro” es novedosa en nuestro medio si se tiene en cuenta que ni el Código Penal de 1924 ni ley especial alguna contemplaban una cláusula similar a la contenida en el artículo N° 27 del Código Penal.<sup>54</sup>

Según el artículo N° 27 del Código Penal, señala que el actuar en lugar de otro es aplicable “(...) aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurren en él, pero si en la representada”, esto es, se hace explícita referencia a que esta cláusula será utilizada para la imputación de delitos especiales. Queda claro que los delitos especiales propios son aquellos que sólo pueden ser cometidos por determinados sujetos, en donde no puede ser cometido por cualquier ser humano.

Dentro de la categoría de delitos especiales cabe distinguir entre delitos especiales propios y los delitos especiales impropios, siendo los primeros aquellos en que la

---

54.- LINARES LINARES José Emmanuel, Responsabilidad penal. 2011

calidad especial del sujeto es determinante para la existencia del delito de tal forma que faltando la misma el hecho es atípico, y de otro lado los segundos se refieren aquellos en que la calidad especial del autor sirve para atenuar o agravar la pena teniendo como correlativo un delito común.

En conformidad con lo dicho, a la presente institución es utilizable exclusivamente para los delitos especiales propios toda vez que sólo en éstos se exigen elementos especiales que fundamenten la punibilidad.

De este modo, el campo de aplicación de la fórmula del actuar en lugar de otro, en su versión peruana, queda reducido a los supuestos de delitos especiales propios en que se produzca una situación de escisión de los elementos especiales entre el representante que es persona natural y el representado que es persona jurídica.

La doctrina ha asumido que esta situación por lo general recaerá en el representante de persona jurídica quien no cumple con las condiciones especiales que exige el tipo penal no pudiéndosele sancionar penalmente, pues de hacerlo se vulnera el principio de legalidad, pero que materialmente ostenta una posición preferente en la configuración del hecho. En suma estaríamos hablando de un caso aplicado a los representantes de las personas jurídicas a quienes en aplicación del principio *Societas delinquere non potest* no se les puede sancionar. En tal sentido se deberá cumplir cuatro condiciones para hacer responder a la persona que realiza un delito especial en lugar de la persona jurídica:

- 1).- La relación de representación: La persona que no reúne la calidad especial de autor debe tener la calidad de órgano de representación autorizado de una persona jurídica. A esta condición se le ha criticado ser muy restrictiva dado que libera de sanción a los que asumen de hecho

la administración de una persona jurídica. Asimismo Gracia Martin refiere que “estas medidas aplicables a personas jurídicas puesto que no son ni especies concretas de aquellas, no tienen naturaleza ni caracteres sancionadores, sino la de medidas preventivas de carácter asegurativo de la comunidad social frente al peligro de utilización de las personas jurídicas u organización para la comisión de delitos por las personas físicas que actúan para ellas, peligro puesto de manifiesto por la previa comisión de un hecho delictivo a través de ella y por la deficiente organización de la misma”

En este sentido, se incluye al administrador que asume el cargo de hecho o careciendo de nombramiento. Lo que interesa es que se domine el riesgo que configura el delito especial correspondiente.

- 2).- Actuar como órgano de representación o como socio representante: Se exige además que el órgano de representación o socio representante actúe como tal.
- 3).- La realización del tipo penal: Esto quiere decir que el delito especial debe poder serle imputado objetiva y subjetivamente al representante de la persona jurídica.

La doctrina nacional se inclina por considerar que en este aspecto las denominadas consecuencias necesarias dentro de nuestro ordenamiento tiene como fundamento a la peligrosidad de la organización, en tanto su imposición no se sustenta en el hecho cometido por la persona jurídica sino en un juicio de peligrosidad de comisión futura de nuevos hechos delictivos.



- 4) Además, se advierte que una culpabilidad de la persona jurídica fundamentada en defecto de organización sólo puede ser referido a las personas titulares de los órganos de representación, es más el deber de vigilancia se refiere sólo a quien posea capacidad de acción, es decir, los individuos que, como órganos de representación de la empresa, actúen a nombre de ellas.

Es preciso dejar claro, que no basta la condición de órgano de representación o de socio para imputar un comportamiento a quien ostente dicha calidad sino que además éste debe realizar el tipo legal requerido. Además, sostenemos que la previsión de este artículo en nuestro sistema penal, no significa en forma concluyente que se niegue la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, porque ambas instituciones presentan finalidades y objetivos distintos.

Obtener la imputación hacia organizaciones, debe ser concebida aisladamente en cuanto a sus presupuestos y consecuencias, de la tradicional concepción acerca de la culpabilidad penal de la persona individual, aplicándose un modelo paralelo al Derecho Penal individual en el que afianzando una culpabilidad de las agrupaciones se logre atenuar el problema de la criminalidad económica organizada, por lo que la culpabilidad de la persona jurídica no es idéntica a la culpabilidad de sus miembros

#### **6.4. ALCANCES CONTENIDOS EN EL ACUERDO PLENARIO 7-2009/CJ-116.**

Con fecha trece de noviembre de dos mil nueve formula el acuerdo plenario número 007-2009/CJ-116 mediante el cual se intenta resolver los problemas

suscitados de aplicación del artículo N° 105 del Código Penal peruano, esto es, la aplicación de las consecuencias accesorias a las persona jurídicas, en razón a que las mismas no son aplicadas jurisprudencialmente. Tales inconvenientes han surgido en tanto que en la ley material no ha desarrollado suficientemente los presupuestos básicos.

Mediante el acuerdo en mención se considera a las consecuencias accesorias como medidas que intentan establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde resultaren involucradas las personas jurídicas. Las causas de la problemática que enfoca el acuerdo plenario pueden ser de dos clases:

- A. Ausencia de reglas específicas de determinación y fundamentación en el Código Penal.
- B. Ausencia de normas procesales.

La postura asumida es de considerar que si bien existe distinta doctrina respecto a la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias, su estructura, operatividad y presupuestos, deberá calificarse a las mismas como sanciones penales especiales

Los presupuestos para imponer las consecuencias accesorias son:

- 1.- Se haya cometido un hecho punible.
- 2.- La persona jurídica sirvió para su realización, favorecimiento u ocultación.
- 3.- Se ha condenado al autor físico y específico del delito. Asimismo, se incluyen como criterios para la aplicación judicial de las consecuencias accesorias a los contenidos en el artículo 110 del Anteproyecto de Reforma de la Parte General del Código Penal de la Comisión Especial Revisora.
- 4.- Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el

hecho punible.

5.- La gravedad del hecho punible realizado

6.- La extensión del daño o peligro causado.

7.- El beneficio económico obtenido con el delito.

8.- La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.

9.- La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica.

10.- La disolución de la persona jurídica se aplicará siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó sólo para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.

En cuanto al ámbito procesal, en el Acuerdo Plenario se recalca la necesidad de que las consecuencias accesorias se apliquen en el marco de un proceso penal con todas las garantías. Así pues, en especial los referidos a la garantía de defensa procesal que comprende el derecho de conocimiento de los cargos, de asistencia letrada, de defensa material o autodefensa, de no autoincriminación y al silencio, de prueba, de alegación, y de impugnación y de tutela jurisdiccional en especial, el derecho a una resolución fundada y congruente basada en el derecho objetivo y derecho a los recursos legalmente previstos-. Asimismo, se adoptan –en cuanto resulten aplicables- los siguientes criterios operativos sobre personas jurídicas inspirados en el Código Procesal Penal de 2004:

El fiscal provincial ha de incluir en su denuncia formalizada o en un requerimiento fundamentado en el curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas involucradas en el hecho punible imputado, incorporando en lo procedente los datos y contenidos a que alude el artículo N° 91.1 del Código Procesal Penal, necesarios para su identificación y el juicio de imputación correspondiente a cargo del juez

penal.

La persona jurídica denunciada debe ser comprendida en el auto de apertura de instrucción o en un auto ampliatorio o complementario en condición de sujeto pasivo imputado, o en los términos del nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal deberá Comunicarle al Juez de Investigación Preparatoria mediante la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. En esta resolución, que deberá notificársele a la citada persona jurídica, el juez penal dispondrá que ella designe un apoderado judicial en iguales términos que los referidos en el artículo N° 92 del Código Procesal Penal.

La persona jurídica procesada tiene, en lo pertinente, los mismos derechos y garantías que la ley vigente concede a la persona del imputado durante la instrucción y el juicio oral.

La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciarse específicamente acerca de la responsabilidad de la persona jurídica. En su caso, solicitará motivadamente la aplicación específica de las consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la persona jurídica por su vinculación con el hecho punible cometido. En todo caso, corresponderá al órgano jurisdiccional el control de la acusación fiscal en orden a la intervención en el juicio oral de la persona jurídica.

La persona jurídica deberá ser emplazada con el auto de enjuiciamiento, pero su inasistencia no impide la continuación del juicio oral. El juez o Sala Penal competente, de ser el caso, impondrá la consecuencia accesoria que resulte pertinente al caso con la debida fundamentación o la absolverá de los cargos. Rige en estos casos el principio acusatorio y el principio de congruencia procesal o correlación.

Al respecto del Acuerdo Plenario se considera que con el mismo si bien no se

asume una responsabilidad penal de las personas jurídicas, si se da una orientación a la aplicación de las consecuencias accesorias, lo que en general resulta un primer paso para asimilar el principio *Societas delinquere potest* conforme se ha expuesto anteriormente.

## CONCLUSIONES

1. La nueva criminalidad que está confrontando a los países y al sistema penal en su totalidad es la criminalidad organizada, empresarial, transnacional, que utiliza instrumentos sofisticados como los medios de comunicación modernos y las redes internacionales. En los últimos tiempos es cada vez más evidente que la criminalidad organizada necesita de empresas para los diferentes ciclos del delito: comisión de delitos, encubrimiento de delitos y financiación de la comisión del delito.
- 2.- No podemos ser ajenos a los cambios producidos en torno al derecho penal económico, la realidad contemporánea hace necesario se asuma el principio *Societas delinquere potest* a fin de poder asumir las nuevas formas de criminalidad existentes.
- 3.- Las organizaciones criminales parecen adoptar como punto de referencia los modelos y estructuras del mundo de la industria y los negocios: la racionalización de los medios personales y materiales, la vocación de permanencia para la obtención de un fin de naturaleza predominantemente económica, la expansión de la actividad en otras áreas geográficas, la interrelación con otras organizaciones, la tendencia a reinvertir una parte de los beneficios, etc. Todo ello ha llevado a hablar desde el plano criminológico de la existencia de una verdadera "industria del crimen". Digamos que las organizaciones criminales cumplen las mismas funciones que las sociedades comerciales, sólo que en el mundo ilícito.
- 4.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas pasa por la reformulación de las categorías jurídicas (acción y culpabilidad) diseñadas exclusivamente para la responsabilidad individual.
- 5.- Durante gran parte del desarrollo de la ciencia penal, la aceptación del aforismo "Societas delinquere non potest", era prácticamente coincidente en la doctrina

dominante, la realidad criminógena subyacente a la criminalidad de empresa obliga a un examen sobre la capacidad de rendimiento de la dogmática penal tradicional y las posibilidades que ofrece la creación de un sistema de imputación penal para las propias personas jurídicas, la actividad societaria ha incidido, de manera alarmante, en el ámbito criminal, hecho que ha llevado a gran parte de las legislaciones penales contemporáneas a replantearse el problema, admitiendo en algunos casos, una supuesta responsabilidad penal de las personas jurídicas

6.- La prevención y detección de los delitos de corrupción constituye una labor continua que requiere de una constante actualización de métodos y procedimientos. Entre los delitos de corrupción en los que participan más comúnmente funcionarios públicos en todos los países, se encuentran aquellos en los cuales las personas jurídicas están involucradas. Muchos países ya tienen en sus sistemas penales una manera de responsabilizar a las empresas que se benefician de la corrupción u otros delitos

7.- Las consecuencias accesorias establecidas en nuestra legislación penal peruana si bien no responden plenamente al principio *Societas delinquere potest*, se constituyen en avances para asumir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal como ya se ha establecido por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 7-2009/CJ-116.

8. La figura denominada actuar en lugar de otro regulada en nuestro Código Penal, no resuelve la problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en tanto la misma busca responsabilizar al autor representante de la misma por las actuaciones que le son competentes al configurado el hecho delictivo.

9.- Demos evitar que se continúe con los vacíos de punibilidad que desembocan en *déficits de prevención general* son tanto más graves si se toma en cuenta que, ante un delito cometido a través de o con ayuda de empresas, no puede bastar con la mera responsabilidad penal individual pues ésta, en realidad, no abarca la auténtica

responsabilidad colectiva por el delito, la cual debería incluso ser mayor dadas las características de las empresas

10.- En lo que se refiere al fundamento político-criminal, es natural la necesidad de enfrentar la “evolutiva” criminalidad económica y empresarial (lógicamente como todo tipo de delincuencia), además de lo señalado por los estudios especializados en la materia que han venido a demostrar que las organizaciones complejas denotan una personalidad sui géneris, es decir una aptitud grupal que deja al margen el comportamiento individual de sus miembros, llegándose a cometer eventos delictuosos cubriéndose de la etiqueta de la persona jurídica. En vista a lo manifestado, es bueno adoptar una perspectiva política-criminal, que proscriba la impunidad que se advierte en torno a la cada vez más creciente delincuencia empresarial. Por ello, mantener conceptos restringidos y clásicos de Derecho Penal-Parte General, no coadyuva en modo alguno a solucionar la problemática de este tipo de delincuencia.



## **RECOMENDACIONES**

- 1.- Se debe optar por un sistema penal elaborado exclusivamente para las personas jurídicas, para lo cual se debe recurrir para la determinación de la culpabilidad a conceptos como el de culpabilidad de la organización a un concepto fundado en aspectos preventivo especiales o bien estableciendo un sistema específico de responsabilidad penal de las personas jurídicas tal cual lo expone HEINE.
- 2.- Se priorice el debate del Proyecto de Código Penal el mismo que se encuentra para su aprobación en el Congreso de la República, al que debe darse mayor difusión a fin de lograr el aporte de los académicos para mejorarlo, constituyendo un primer paso más que destacable a favor de establecerla responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 3.- Se debe optar un sistema penal elaborado exclusivamente para las personas jurídicas, para la cual se debe recurrir para la determinación de la culpabilidad a conceptos como el de culpabilidad de la organización a un concepto fundado en aspectos preventivo especiales o bien estableciendo un sistema específico de responsabilidad penal de las personas jurídicas tal cual lo expone Heine.
- 4.- Se difunda la posición adoptada en el Dictamen de la Comisión de justicia y derechos Humanos, para su debate académico respecto a que la posibilidad de responsabilizar a las personas jurídicas por la comisión de delitos, se basa en la introducción de modificaciones en los conceptos de acción y culpabilidad para entender que las conductas realizadas en nombre de las personas jurídicas deben ser consideradas como acciones propias de la misma y que el reproche social que fundamenta la responsabilidad de la persona jurídica es la culpabilidad de la organización. Desde este punto de vista, las personas jurídicas responden porque sus órganos o representantes no han tomado las suficientes medidas de cuidado que son necesarias para garantizar un negocio ordenado y no delictivo.

## **BIBLIOGRAFIA**

- 1.- AROCENA, Luis F. y García Elorrio, Juan P. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Encuentro Regional Sobre Responsabilidad Del Sector Privado En La Lucha Contra La Corrupción. Bogotá, República de Colombia, 7 y 8 de marzo. 2013.
- 2.-BACIGALUPO, Silvina “Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas Editorial Hammurabi SRL Buenos Aires Julio 2001
- 3.- BUSTOS RAMÍREZ Juan. “Obras Completas” Tomo I Derecho Penal Parte General Ara Editores Lima 2004
- 4.- BUSTOS RAMÍREZ Juan. “Obras Completas” Tomo II Control Social y Otros Estudios. Ara Editores Lima 2004.
- 5.- BANCHIO, Pablo R. Apuntes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Revista Argentina de Derecho Empresario. Mayo. 2006. Argentina.
- 6.-BERNATE OCHOA, Francisco. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Disponible en Diario La República de Colombia, noviembre de 2012. Recuperado el 14 de abril de 2014 en:[http://www.larepublica.co/asuntos-legales/responsabilidad-penal-de-las-personas-jur%C3%ADdicas\\_25828](http://www.larepublica.co/asuntos-legales/responsabilidad-penal-de-las-personas-jur%C3%ADdicas_25828)
- 7.-SOARES, Jardel. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas: Un Estudio De Derecho Comparado Entre Argentina Y Brasil. Perú. Disponible en Revista Digital derecho y cambio social, abril de 2014. Pág. 12. Recuperado el 14 de abril de 2014 en:

[http://www.derechoycambiosocial.com/revista031/responsabilidad\\_penal\\_de\\_las\\_personas\\_juridicas.pdf](http://www.derechoycambiosocial.com/revista031/responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas.pdf)

8.-DESPORTES, Frédéric y Le Gunehec, Francis: “Las penas aplicables a las personas jurídicas” en *Anuario de Derecho Penal*, N° 1997-1998, Universitas Friburgensis, Friburgo, Suiza, 1998.

9.-DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro. Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el Derecho Comparado. Perú. Disponible en Revista Digital derecho y cambio social, 2013. Recuperado el 14 de abril de 2014 en: [http://www.derechoycambiosocial.com/revista031/responsabilidad\\_penal\\_de\\_las\\_personas\\_juridicas.pdf](http://www.derechoycambiosocial.com/revista031/responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas.pdf)

10.-ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de las Personas: Personas Jurídicas y Organizaciones de Personas no Inscritas, Tomo II, Editorial Grijley, sexta edición mayo 2012.

11.-ESPINOZA GUTIÉRREZ, Sandra. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: la culpabilidad. Doctorado en Derecho. Universidad San Martín de Porres. Perú. 2011.

12.-HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. Chile

13.- DIEZ RIPOLLES, José Luis “Sistemas de imputación de responsabilidad penal a personas jurídicas –Responsabilidad penal de las personas jurídicas: regulación española

Págs.133 al 164. En libro Homenaje al Profesor José Hurtado Pozo El Penalista de Dos Mundos.

14.- DÍAZ PITA, M del Mar. El Principio Societas delinquere non potest y la responsabilidad de las personas jurídicas en Tratado de Derecho Penal. Desafíos del Derecho Penal Contemporáneo. Obra Colectiva. 2004. Editora Normas Legales SAC

15.- GARCÍA CAVERO Percy “Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano. Artículo publicado en la Revista de Derecho. Universidad de Piura Vol. 7 Pág. web [http://www.unifr.ch/ddp 1/derecho penal/articulos/a 2008052181pdf](http://www.unifr.ch/ddp1/derecho_penal/articulos/a_2008052181pdf).

16.- HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General I 3° Edición GRIGLEY. 2005

17.-HURTADO POZO, José; Del Rosal Blasco, Bernardo/ Simons Vallejo, Rafael. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: Una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.

18.- LINARES LINARES José Emmanuel, Responsabilidad penal. 2011

19.- OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias, jurídicas, políticas y sociales 2003 editorial Eliasta

20.- HURTADO POZO, José. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Artículo publicado la web [http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an\\_1996\\_09.pdf](http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1996_09.pdf)

- 21.- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Derecho Penal Parte General Tomos I, II y III. Gaceta Jurídica-2004.
- 22.- REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Panorama actual de la responsabilidad penal de las empresas” artículo Publicado en Revista Peruana de Derecho de la Empresa – Derecho Penal de la Empresa. Nro. 68 Año XXIV pág. 80-81.
- 23.- REYNA ALFARO, Luis Miguel, Coordinador. Victimología y Victimodogmática. Una Aproximación al estudio de la Víctima en el Derecho Penal. Ara Editores
- 24.-REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de Derecho penal económico. Parte General y Parte Especial. Lima: Gaceta Jurídica, 2002.
- 25.- SOLIS ESPINOZA, Alejandro. Criminología. Panorama Contemporáneo. Lima – Perú. 2004
- 26.- NIETO Martín, Adán. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Resumen de la monografía “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo”.
- 27.- TIEDEMANN, KLAUS. “Derecho penal y nuevas formas de criminalidad”. (Traducido por el profesor Manuel Abanto Vásquez) Editorial GRIJLEY. Segunda edición. Lima 2001.
- 28.- VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal” parte general. GRIJEY. Segunda reimpresión. Lima 2007.

29.-MEINI MÉNDEZ, Iván. “Código Penal comentado”. Tomo I. Gaceta Jurídica Lima 2004.

30.-Responsabilidad Penal de las Empresas. Disponible en: Biblioteca Nacional de Chile. Recuperado el 14 de abril de 2014 en: <http://www.bcn.cl/resumenes-de-leyes/responsabilidad-penal-empresas>

30.- Responsabilidad Penal de las Empresas. Disponible en: Biblioteca Nacional de Chile. Recuperado el 14 de abril de 2014 en: <http://www.bcn.cl/resumenes-de-leyes/responsabilidad-penal-empresas>

31.-ESPINOZA GUTIÉRREZ Sandra, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.2011 Lima.

32.-SAVIGNI, System des heutigen römischen Rechts, Berlin, , T. II, 1840

33.- Sobre responsabilidad, recuperado 14 de abril de 2014 en <http://www.gerencie.com/sobre-la-responsabilidad.html>

34.- Unidad de Análisis financiero. Responsabilidad de personas jurídicas se ratifica en informe. Disponible en Ecuador. Inicio de UAF, 2012. Recuperado el 14 de abril de 2014 en: <http://www.uaf.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/resumen-de-noticias/843-responsabilidad-de-personas-juridicas-se-ratifica-en-informe>

35.- URQUIZO OLAECHEA, José; Abanto Vásquez, Manuel, Salazar Sánchez, Nelson.

36.- VÉLEZ Sarsfield citado por Manuel Ossorio en su diccionario de ciencias, jurídicas, políticas y sociales 2003 editorial Eliasta

37.- VIDE BERNER, Lehrbuch des deutschenstrafrechts, p. 195; Binding, Handbuch des strafrechts, Leiping, 1885, Von Lilienthal, GrundrisszuVorlesungenuberdeutschesStrafrecht, 2º ed. 1890

38.- VIDE VON Liszt, Lebrbuch des deutschenStrafrechts, 3º ed, Berlin, 1888, pp. 114 y ss; Hafter, Die Delikts-und Straffahigkeit der Personenverbände, Berlin, 1903, pp. 75 y ss; Mestre, Les Personnes Morales et le Probleme de leurResponsabilitéPénale, Paris, 1899.

39.- ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. “Vigencia del principio Societas delinquere potest en el moderno Derecho penal”. En: Hurtado Pozo, José/ Del Rosal Blasco, Bernardo/ Simons Vallejo, Rafael (Directores). La responsabilidad criminal de las personas jurídicas: Una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.

40.- ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Anteproyecto de Código Penal Peruano de 2009. La Reforma del Derecho Penal y del Derecho Procesal en el Perú. Anuario de Derecho Penal 2009.

## ANEXOS

### ANEXO N° 01: PRESUPUESTO

RUBRO	CONCEPTO	COSTO
BIENES	USB	S/. 30.00
SERVICIOS Y TASAS	MOVILIDAD	S/. 100.00
	SOLICITUDES Y OTROS	S/. 300.00
	COPIAS	S/. 80.00
	IMPRESIONES	S/. 100.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	S/. 150.00
REMUNERACIONES	ASESOR	S/. 3,000.00
	TOTAL	S/. 3,760.00